



# GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXIX - N° 1338

Bogotá, D. C., miércoles, 18 de noviembre de 2020

EDICIÓN DE 65 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

## CÁMARA DE REPRESENTANTES

### PONENCIAS

#### INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 364 DE 2020 CÁMARA NÚMERO 007 DE 2019 SENADO

*por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción.*

##### INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY N.º 364 DE 2020 CÁMARA N.º 007 DE 2019 SENADO

“Por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción”

#### I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente proyecto, de autoría de la Ministra de Justicia y del Derecho Dra. Margarita Leonor Cabello Blanco y la Presidenta del Consejo de Estado Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, fue radicado el 20 de julio de 2019 en el Senado de la República. El texto radicado fue publicado en la Gaceta 726 del 9 de agosto de 2019.

#### II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa se presenta en el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado, y en armonía con los planes fijados por el Gobierno nacional, con el fin de lograr la reforma que requiere el sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano, para lo cual el Consejo de Estado, junto al Ministerio de Justicia y del Derecho, proponen la revisión y ajustes a través de varias modificaciones a la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contenido en la Ley 1437 de 2011, en procura de maximizar y aumentar los recursos existentes para lograr una pronta, cumplida y eficiente administración de justicia en la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Propuesta que es fruto del arduo trabajo por más de cinco años de un grupo de servidores judiciales, con largas discusiones en las que se analizaron las normas, procedimientos y realidades, y las opiniones y observaciones recibidas de la ciudadanía.

Igualmente, con el fin de tener una administración pública más ágil, eficiente y cercana al ciudadano el proyecto propone modificar los artículos 5, 54, 56, 59, 60, 61 y 65 de la Ley 1437 de 2011 y crear los artículos 53A y 60A. Estos cambios tienen por objeto fortalecer y promover el uso de los medios tecnológicos y electrónicos en los trámites y procedimientos administrativos ante las entidades públicas.

#### III. TRÁMITE DEL PROYECTO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

En el trámite del primer debate en el Senado de la República, se realizó una audiencia pública el 11 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. en el recinto de la Comisión Primera de dicha Corporación.

El informe de ponencia para primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1212 del 11 de diciembre de 2019. El 2 de junio de 2020, el Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en primer debate por la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República.

El informe de ponencia para segundo debate fue publicado en la Gaceta del Congreso número 345 del 13 de junio de 2020. El 20 de junio de 2020, el Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en segundo debate por la Plenaria del Senado de la República, ver Gaceta del Congreso No. 531 del 21 de julio de 2020.

#### IV. TRÁMITE DEL PROYECTO EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Para el primer debate en Cámara de Representantes los ponentes designados por la Mesa Directiva rindieron informe el 30 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta 979 de 2020. La discusión tuvo lugar en dos sesiones, la primera el 14 de octubre de 2020, en la cual se aprobó el informe de ponencia y los artículos sobre los cuales no se presentaron proposiciones. Dado que se presentaron un total de treinta (30) proposiciones durante el debate, la Mesa Directiva de la Comisión decidió nombrar una subcomisión que se encargara del estudio de las propuestas.

Con posterioridad a la designación de la subcomisión, se radicarón cuatro (4) proposiciones adicionales y se dejaron como constancia otras cuatro (4). En total, se presentaron treinta y cuatro (34) proposiciones sobre diecinueve (19) artículos y tres (3) que adicionaban artículos nuevos al texto radicado. Esta subcomisión rindió su informe cuyas conclusiones fueron dadas a los integrantes de la Comisión Primera en la sesión del miércoles 21 de octubre, en la cual se votaron los artículos objeto del estudio, de conformidad con el informe rendido.

Por otra parte, teniendo en cuenta el impacto que se espera que el proyecto tenga en los procesos de la jurisdicción contencioso administrativa, los ponentes designados en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes propusieron a dicha célula legislativa la realización de audiencia pública a fin de escuchar a la academia y a jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa de la Rama Judicial. La audiencia tuvo lugar el 24 y 31 de agosto de 2020 vía remota. A continuación se presentan las intervenciones realizadas.

##### 1. Audiencia del 24 de agosto de 2020

En la Audiencia realizada el 24 de agosto participaron tres miembros de la Academia, quienes expusieron las observaciones al texto aprobado por la Plenaria del Senado que a continuación se resumen.

- **Universidad del Rosario, Dr. Manuel Restrepo:** Propuso 4 adiciones relacionadas con la primera parte del CPACA, y advierte una eventual inconstitucionalidad:

<p>a. Adicionar inciso en el artículo 82 del CPACA, creando grupos de trabajo de los abogados del Estado por cada sector administrativo y nivel territorial en cada departamento y municipio, para revisar y aprobar los proyectos de decisión a las apelaciones que se presenten contra los actos administrativos, en todos los niveles y servicios.</p> <p>b. Adicionar dos incisos al artículo 188 del CPACA, a fin de condenar en costas cuando en el proceso se demuestre que la decisión administrativa se profirió en abierta contradicción con una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando se haya intentado la demanda a pesar de la existencia de una sentencia de este tipo, contraria al sentido de la fundamentación de las pretensiones. Igualmente, propone condena en costas por no conciliar en la etapa correspondiente, si con dicha decisión se desconoció una sentencia de unificación.</p> <p>c. Crear incentivos para que las entidades estatales agoten todas las formulas conciliativas, evitando llegar a la jurisdicción. En este sentido propone crear un artículo nuevo en que se obligue a todas las entidades a tener en sus Comités de Conciliación, con voz y voto, asesores jurídicos de la entidad que ejerce tutela sobre la respectiva entidad.</p> <p>d. Adicionar un inciso en el artículo 42 del CPACA, que obligue al representante legal a requerir y tener en cuenta un análisis de viabilidad jurídica aprobado por la oficina jurídica de la entidad, en que cuente con al menos 5 aspectos.</p> <p>e. Advierte eventual inconstitucionalidad en el proceso administrativo sancionatorio fiscal adicionado en debate en el Senado, al atribuir a la Contraloría General de la República la competencia para suspender servidores públicos, sobre lo cual ya hubo un pronunciamiento en caso similar por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-484 de 2000 al examinar disposiciones de la Ley 42 de 1993.</p> <p>- <b>Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, Dr. Carlos Ballesteros:</b> Presentó las siguientes propuestas:</p> <p>a. Sobre la Parte Primera del Código recomendó que se aproveche la oportunidad para incluir las redes sociales en que haya comunicación bidireccional, como medio para ejercer el derecho de petición.</p> <p>b. En el artículo 2 del proyecto de ley, y para definir los conflictos de competencia, sugirió otorgar fuerza vinculante a los conceptos del Consejo de Estado, para que sean acatados por las partes. La misma propuesta aplica para el artículo 112 numeral 7.</p> <p>c. Señaló que considera antitético que se incluyan en una norma general, como es el CPACA, disposiciones sobre el proceso administrativo sancionatorio fiscal por cuanto este requiere una norma especial, indicó que este no es el medio para introducir estas normas en el ordenamiento jurídico.</p> <p>d. Sobre el uso obligatorio de los medios tecnológicos para que los ciudadanos se comuniquen y reciban comunicaciones y notificaciones de las entidades, consideró que aun no es</p>	<p>recomendable hacer este cambio y propone que sea paulatino, pues la transición a digital aun no ha sido completa en toda la población. Además afirmó que la facultad legal de establecer cuáles procesos administrativos serán obligatorios por medios digitales, no compete al Ministerio de las TIC sino al Congreso mediante ley.</p> <p>e. En cuanto a la Parte Segunda del CPACA, en el artículo 27 del proyecto de ley, propuso suprimir la posibilidad de que el demandante demande en la sede de la entidad, pues la mayoría de demandas contra la Nación se acumulan en Bogotá.</p> <p>f. Sobre dictamen pericial de que trata el artículo 44, señaló una contradicción en la remisión a otras normas, pues al inicio remite al CPACA, pero al final remite al Código General del Proceso, habiendo suficientes normas en el CPACA para resolver estos asuntos. Así mismo en el artículo 45 consideró que es suficiente con la redacción que ya trae el CPACA en el artículo 219.</p> <p>g. Recomendó aclarar una contradicción en el artículo 52, en tanto al inicio del artículo se establece el efecto suspensivo pero, al final, parece que se aplicara el efecto devolutivo.</p> <p>h. Sugirió adicionar un nuevo artículo por el cual se establezcan límites al tiempo que dura un proceso en el despacho judicial, tal como se establece en el artículo 121 del Código General del Proceso, en virtud del cual si pasa un tiempo determinado el juez pierde competencia para seguir conociendo de la acción y se traslada a otro juez.</p> <p>- <b>Centro de Estudios de Derecho Procesal, Dra. María Andrea Calera Tafur y Dr. Guillermo Caez Gómez:</b> Presentó las siguientes seis recomendaciones.</p> <p>a. Respecto de los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 señaló que, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-484 del año 2000, no es propio suspender ni destituir a alguien de su cargo por parte de la Contraloría General de la República. Igualmente, en el escrito aportado previo a la audiencia señaló que el procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal tiene naturaleza reparatoria o resarcitoria y no sancionatoria y pretende es que, quien sea declarado fiscalmente responsable, reintegre el valor de esos dineros como mecanismo para preservar y proteger el patrimonio del Estado.</p> <p>b. Sobre al artículo 19 señaló que en el literal b se indica que resuelven de plano los impedimentos pero no se incluyeron las recusaciones.</p> <p>c. Sugirió eliminar la primera parte del literal f) del numeral segundo del artículo 125 propuesto, por considerar que al establecerse la distribución de competencias entre salas, secciones y subsecciones en asuntos de nulidad electoral, actos de contenido electoral, y en medidas cautelares, podrían hacer lento el proceso de nulidad electoral el cual debe resolverse de manera célere, entre 6 meses a un año. Adicionalmente, señaló que la inclusión de las medidas cautelares es muy abierta y amerita una precisión, esta asignación plural de competencia debería ser únicamente dentro de los procesos de nulidad electoral, lo cual sería coherente con el último inciso del artículo 277 CPACA.</p>
<p>d. Frente al artículo 27 señaló que mantener como regla de competencia territorial de la reparación directa la relativa a la posibilidad de presentar la demanda en la sede principal de la entidad demandada, contribuirá a la congestión de los Jueces Administrativos de la Sección Tercera de Bogotá y de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Respecto del numeral 9 de este mismo artículo, indicó que se establece que en los procesos de nulidad electoral que no sean de única instancia, será competente el juzgado o tribunal donde el nombrado, elegido o llamado "preste o deba prestar el servicio" esta expresión se usa para definir la competencia en asuntos de carácter laboral, siendo la expresión técnica donde el nombrado, elegido o llamado "ejerza su cargo o curul".</p> <p>e. Frente al artículo 52 del proyecto que modifica el artículo 243 vigente del CPACA sobre el recurso de apelación, enlista 8 categorías de autos que son apelables, pero en el último incluye todos los demás autos previstos como apelables en el CPACA o en normas especiales, por lo cual falta precisión. Sobre los efectos en que debe concederse la apelación, parágrafo 1, sugiere eliminar el último párrafo del parágrafo primero del artículo propuesto por cuanto aunque se establece que la apelación se concede en el efecto suspensivo, lo cual parece una regla, al final del mismo parágrafo 1 establece que el que decreta, deniegue, modifique medida cautelar se concederá en el devolutivo, lo que se puede considerar contradictorio.</p> <p>f. Respecto de los artículos 55 y 56 del proyecto de modificación, señaló que la redacción no es clara, teniendo en cuenta que se establece que tanto para el recurso de queja como para el de Súplica establece que se interpondrán cuando se rechace o declare desierta la apelación. Propuso que el recurso ordinario de queja se circunscriba a los eventos de: (i) no concesión y (ii) declaratoria desierta de la apelación, no para su rechazo, y que el de súplica está llamado a operar ante el (iii) rechazo de la misma y no así para su no concesión, ni la declaratoria desierta del mismo, tal y como ocurre en la actualidad.</p> <p><b>2. Audiencia del 31 de agosto de 2020</b></p> <p><b>Ministerio de Justicia - Viceministra de Promoción de la Justicia, Dra. Juanita López Patrón -</b></p> <p>Este proyecto lo que busca es atender tres problemáticas que se han identificado desde la expedición de la Ley 1437 de 2011. No se trata de cambiar un código por otro, pero si hacer unos ajustes puntuales dadas las problemáticas identificadas en la práctica. En primer lugar, la congestión existente en el Consejo de Estado, que demora el proceso contencioso administrativo. Además, se pretende profundizar en normas que provoquen que el Consejo de Estado sea el máximo órgano de lo contencioso administrativo pues, hoy en día, se ha avanzado en sentencias de unificación que creó la ley 1437, lo cierto es que sigue siendo en esencia un tribunal de instancia y, lo que se pretende con este proyecto, es fortalecer su función unificadora que posicione al Consejo de Estado como el máximo órgano de lo contencioso administrativo. Y, por último, resolver antinomias que existen en el texto actual del código para lograr mayor seguridad jurídica.</p> <p>Para ello, se intenta reducir las competencias del Consejo de Estado y aumentarla a los juzgados y tribunales administrativos, lo cual repercutirá en mayor agilidad en los procesos. En segundo lugar,</p>	<p>definir una sola línea de interpretación que permita por un lado agilidad, en la medida en que habrá más claridad y, por último, brinda seguridad jurídica a los ciudadanos teniendo claro cuál es la manera que deben aplicarse las normas de código.</p> <p>En cuanto agilización, se propone la creación de la sentencia anticipada, que existe en el Código General del Proceso y que ha permitido que la Jurisdicción Ordinaria resuelva más rápido procesos de menor complejidad, en los que no hay problemas probatorios sino asuntos de puro derecho. También se regula lo relacionado con el dictamen pericial, se definen unas reglas más claras para resolver las excepciones previas y se plantea una profundización de la función de precaver litigios entre las entidades públicas a cargo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil y se profundiza la regulación que ya trae el código contencioso en su parte administrativa como lo es el trámite a través de tecnologías de la información para ahondar en el proceso de transformación digital de la justicia que se ha venido liderando desde el Gobierno Nacional, de la mano con las Cortes.</p> <p><b>Consejo de Estado - Presidente Dr. Álvaro Namén Vargas -</b></p> <p>La elaboración de este proyecto responde a necesidades concretas que han aflorado durante la ejecución de un código y que son normales en la estabilización de los órdenes jurídicos cuando se estrenan instituciones. Por tanto, primero se resalta que la Ley 1437 tiene dos avances fundamentales que es bueno no perder en perspectiva en su modificación. El primero, el que el código haya tenido una adaptación a la Constitución Política de 1991, teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 01 del 84 cuya vigencia se expidió en su momento a la luz de la Constitución Política de 1886. Era un código que no respondía a los criterios nuevos de garantías y derechos y al perfil del juez contencioso bajo el modelo del Estado Social de Derecho acogido bajo la Constitución de 1991.</p> <p>El segundo aspecto a resaltar, es que teniendo en cuenta esa constitucionalización del derecho administrativo y esa nueva visión del juez contencioso, hay unos puntos que son axiales en ese código que se pueden resaltar. Primero la adopción de un proceso mixto que introduce audiencias, es decir, introduce el principio de oralidad. Al haber una parte escrita y una parte oral, se permite mayor contacto con las partes y con las pruebas y eso no se puede perder de vista en las modificaciones que se vayan a realizar. En segundo lugar, incorporó la tecnología de la información y las telecomunicaciones en avanzada y premonitoriamente a los que se vive en la actualidad. Esto ha permitido que en época de pandemia se haya podido funcionar perfectamente bajo el sistema procesal. Sin embargo, el pasar de 8 años implica nuevas tendencias que se deben tener en cuenta en esas modificaciones.</p> <p>El tercer aspecto tiene que ver con la unificación de jurisprudencia para generar seguridad jurídica y para privilegiar el principio de igualdad en la dispensa de la administración de justicia contenciosa, la idea es que el tribunal de cierre, cual es el Consejo de Estado, pueda expedir y unificar jurisprudencias que tengan esa categoría y que permitan activar ciertos institutos como la extensión de la jurisprudencia y como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Entonces, un propósito axial de este código, es fortalecer como órgano de cierre al Consejo de Estado en la unificación de jurisprudencia. Ahora, el tercer aspecto tiene que ver con la introducción de herramientas para que los procesos no sean ilusorios, por ello un componente de medidas cautelares que permiten anticipar los derechos cuando hay buena apariencia del mismo y, asimismo, para evitar el peligro de la tardanza del proceso que daría lugar a ser nugatorio sus efectos.</p>

<p>En último lugar, se pretende destacar la unificación de las acciones contencioso administrativas que bajo el esquema anterior significaban una falta de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que técnicamente cuando había equivocación en la acción el juez debía inhibirse y eso implicaba una denegación de justicia. Ahora, este código avanzó porque fusionó bajo el concepto de los medios de control, las acciones contenciosas anteriores. Este código acercó la justicia al ciudadano, por ello la demanda de justicia de lo contencioso administrativo subió de manera exponencial, 175% frente al año 2012 cuando empezó el código, lo que equivale a 267000 procesos que ingresan al contencioso administrativo, dentro de los cuales 34000 de ellos quedan en el Consejo de Estado y una proporción importante en los tribunales de 85000 y en los Juzgados de 140000. Este aparato de justicia esta desfasado frente a esa demanda. Eso es lo que se pretende recomponer pues, todo lo que llega del país, como un cuello de botella lo recibe el Consejo de Estado, es decir, como tribunal de segunda instancia, el Consejo recibe algunos procesos y eso genera congestión en la corporación que hace nugatoria su finalidad principal de órgano de cierre, es decir, dedicarse a unificar jurisprudencia como lo deben hacer las altas cortes. La congestión de ese órgano oscila en al menos un 50%, las cifras de la Contraloría llegan al 59%, es decir, es la jurisdicción más congestionada por encima de la ordinaria.</p> <p>Es por aquella razón, que hay reclamos recurrentes de los ciudadanos en relación a la demora en la prestación del servicio, lo que obedece, por su puesto, a que la capacidad instalada actual y las competencias como están repartidas no permiten tener un índice de evacuación adecuado a las expectativas que demandan la celeridad de esos procesos. De manera que el principal propósito sustancial de este código, es atacar la congestión en el Consejo de Estado, para realmente convertirlo en un tribunal de cierre.</p> <p>Este proyecto, antes de ser presentado fue concebido durante varios años recogiendo la experiencia de los usuarios, jueces, magistrados y la academia. A ello se unió el Ministerio de Justicia y del Derecho de forma extensiva en donde a través de la incorporación de la viceministra y sus asesores y la comisión normativa del Consejo de Estado a la cabeza del William Hernández y Edgar González, Consejeros de Estado, propiciaron una normativa que persigue unos objetivos muy concretos, entre los cuales se encuentra fortalecer el Consejo de Estado como Tribunal Supremo, agilizar el trámite de los procesos y reducir la congestión, resolver antinomias y ambigüedades que quedaron en un código que si bien ha sido de utilidad presenta algunos vacíos y contradicciones que se pretende conjurar con este proyecto de reforma.</p> <p>Por último, incentivar el uso de las tecnologías de la información en el procedimiento administrativo, recogiendo en buena parte la filosofía del Decreto Legislativo 806 de 2020 del Gobierno Nacional que le ha permitido a la justicia operar con las TIC. Sin embargo, ese decreto tiene una vigencia de dos años y como se ve en las bondades de la tecnología de la información, con ese decreto se ha permitido funcionar, lo que se propicia es su introducción de manera permanente en el Código Contencioso Administrativo. Con miras a alcanzar esos propósitos, se hace una distribución armónica de las competencias entre el Consejo de Estado, los Tribunales y Juzgados Administrativos y de ahí no solo se deriva un alivio en la congestión en el Consejo de Estado, sino que además se garantiza el principio de doble instancia, porque hay procesos que llegan al Consejo de Estado que eran de única instancia y que se están trasladando a los tribunales en primera instancia para que se surta la segunda instancia en el Consejo y, con ello, se da la garantía del artículo 29 Superior y así resolver esos conflictos que solo resolvía el Consejo de Estado.</p>	<p>Por último, entre estas generalidades, se debe resaltar el fortalecimiento de la función unificadora que anima el procedimiento contencioso administrativo. Existen detalles que, si se quiere, se deben arreglar para que se puedan armonizar las competencias y entren a operar los recursos extraordinarios y la unificación de jurisprudencia en una forma eficiente y eficaz, pretendemos con ello que realmente se pueda cumplir con el rol que debe realizar una alta Corte en una administración de justicia. Asimismo, lograr un contencioso más ágil y eficaz y para eso se hacen unas cirugías muy concretas al procedimiento contencioso, verbigracia, en materia de notificaciones existe un término dilatorio por cuenta del Código General del Proceso de 25 días, lo que significa que en el traslado de la demanda puede tardar varios meses. Todo esto da una dilación innecesaria en la primera etapa del proceso, para lograr términos racionales que se tiene en materia de notificación personal y de traslado de la demanda.</p> <p>El trámite de las excepciones previas, se pretende armonizar con el Código General del Proceso porque en el actual CPACA las excepciones previas y mixtas se entran a resolver en la audiencia inicial y se termina dilatando el proceso cuando las excepciones previas, que atacan el proceso mismo, pueden ser resueltas antes de aquella audiencia, y si requiere de pruebas, allí si podrían permanecer en dicha audiencia. Así pues, se pretende refinar el proceso teniendo en cuenta la celeridad en el mismo a través del trámite de las excepciones y también por medio de la sentencia anticipada en la jurisdicción contenciosa pues cuando hay una excepción mixta y el juez tenga prueba de ello, pueda dictar sentencia anticipada sin esperar al final del proceso en la audiencia de alegaciones y juzgamiento, pero igualmente cuando tenga elementos de juicio suficientes o las partes de común acuerdo así lo soliciten porque están todos los elementos probatorios pueda entrar a dictar sentencia para así ahorrarle las etapas del proceso.</p> <p>Otra de esas cirugías, se pretende hacer es una adopción plena del criterio de conexidad para la ejecución de las sentencias condenatorias y conciliaciones para que, en competencia, el mismo juez de la sentencia del proceso declarativo sea quien ejecute la sentencia, con esto mayor agilidad, conocimiento y certeza de un proceso que es consecencial al otro. Finalmente, la modificación de los recursos ordinarios, para que el de reposición proceda contra todos los autos salvo norma en contrario y para que se modifiquen los efectos del suspensivo al devolutivo con la finalidad de que no quede en suspenso el proceso por la mera introducción del recurso.</p> <p>Respecto del dictamen pericial, en este momento es mixto, esto es que las partes pueden aportarlos al inicio del proceso o puede ser decretado por el juez, sobre esto se han presentado unas dificultades porque cuando se concibió estaba armonizado el Código de Procedimiento Civil y una vez fue reemplazado solamente se tuvo en cuenta una forma de practicar la prueba pericial que es la de aporte por las partes, la solicitada por el juez quedó incongruente, por lo cual de tuvo que hacer una consagración para que este modelo que traía el código anterior tuviera unos términos y ciertas precisiones que permitan hacer una contradicción adecuada y una evacuación y un aporte adecuado a dicha prueba.</p> <p><b><u>Consejo de Estado - Magistrado Willian Hernández Gómez</u></b></p> <p>Para efectos de reforzar la función de unificación y con ello consolidar al Consejo de Estado como órgano cúspide de lo Contencioso Administrativo, el artículo 182 B de este Proyecto de Ley plantea las Audiencias Públicas Potestativas. En virtud de este artículo se crea la oportunidad de realizar audiencias cuando de sentencias de unificación jurisprudencial se tratare y con ello la posibilidad de</p>
<p>escuchar a la academia, expertos en las materias objeto del proceso o ciudadanos que introduzcan aportes de una manera constructiva al momento de proferir una sentencia de unificación jurisprudencial.</p> <p>El Decreto Legislativo 806 de 2020 adoptado en el marco de la Emergencia Sanitaria, cobra gran relevancia al tocar todo lo correspondiente a la Sentencia Anticipada. Se debe revisar la experiencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 y sería esta la gran oportunidad de entender lo que se está viviendo en la actualidad en los tribunales, los juzgados administrativos y en el mismo consejo de estado al aplicar esta norma que retoma la redacción que tiene el Proyecto, pues se han generado algunas controversias interesantes y sería bueno tener conocimiento sobre ello para efectos de implementar unos ajustes en la redacción, sobre todo en lo que concierne a las excepciones mixtas.</p> <p><b><u>Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil Magistrado Edgar González López</u></b></p> <p>Se propone introducir una reforma a las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como es bien sabido la sala de consulta es un órgano que emite o resuelve las inquietudes o emite conceptos a favor o a solicitud del gobierno nacional. Hay una función que se tiene, que existe en este momento y es una función relacionada con emitir conceptos sobre controversias entre entidades estatales de diferentes órdenes, con el fin de prever un futuro conflicto o prever un eventual litigio. Desde este punto de vista la Agencia Nacional de Defensa Jurídica consultó y planteó la posibilidad no tanto de ampliar el contenido si no de establecer el procedimiento para resolver estas controversias entre entidades del orden Nacional.</p> <p>La Agencia Nacional de Defensa Jurídica expresó que desde el año pasado hasta el momento hay conflictos judiciales con alrededor de 3.2 billones de pesos entre entidades estatales (lo cual al parecer no tendría mucha justificación) que se incrementan por los costos, los honorarios, las costas judiciales y los intereses que están corriendo.</p> <p>La Agencia Nacional de Defensa jurídica solicita que se establezca un pequeño procedimiento en la reforma del CPACA que permita realmente desarrollarlo. En este momento lo estamos desarrollando, hoy en día se tiene pleno manejo de dos conflictos que se están llevando en este sentido.</p> <p>Consejo de Estado de la mano de la Sala de Consulta y Servicio Civil tienen la mejor disposición de coadyuvar a esa solicitud del Gobierno para que las entidades no se demanden entre sí, si no que en la medida de lo que como entidad se pueda adelantar se emitan los conceptos para resolver los conflictos, planteando estos conceptos como no vinculantes y dentro del marco de función consultiva.</p> <p><b><u>Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Magistrado Luis Gilberto Ortigón</u></b></p> <p>Se estima necesario exponer algunos puntos en nombre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este tiene unas características especiales ya que es el tribunal más grande del país y quizá el más complejo en la medida en que le corresponde conocer sobre todos los asuntos de Cundinamarca, los asuntos de Bogotá (Ciudad de 8 millones de personas, sede de casi todas las instituciones del orden nacional, que en su gran mayoría son demandadas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca) y sumado a esto también le corresponde tener conocimiento de los</p>	<p>asuntos del Departamento del Amazonas, siendo así la situación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es compleja.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por los intervinientes, se respalda el Proyecto de Ley que reforma la ley 1437 de 2011 en la medida que le da nuevas responsabilidades a los tribunales administrativos y a los jueces administrativos. Los tribunales administrativos terminarían siendo órganos de cierre y quedaría el Consejo de Estado teniendo conocimiento de los asuntos de Unificación lo cual es de la mayor importancia ya que se sientan las bases de la jurisprudencia, se sientan los precedentes judiciales sobre los cuales todos estaríamos sometidos y a la vez se busca la unidad en el orden Nacional en el tema Contencioso Administrativo.</p> <p>Sin embargo, el artículo 136 y 185 de la Ley 1437 de 2011, son normas que se están estrenando en los Tribunales Administrativos en el Orden Nacional, el artículo 136 casi que es una reproducción del artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de los estados de Excepción. El artículo 136 nos dice que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en concreto a los tribunales administrativos les corresponde asumir el control inmediato de legalidad de los actos administrativos que se dicten como desarrollo de los estados de excepción y el procedimiento lo regula el artículo 185 que dice que debe sustanciarlo un magistrado y fallarlo la sala plena del tribunal (el Consejo de Estado en esta situación no tiene injerencia ya que se somete al código), estos cuentan con una reglamentación especial que les permite tener una sala de decisión.</p> <p>Con ocasión de esta pandemia, se dispararon los actos administrativos que dictaron las entidades territoriales y que por supuesto son objeto de Control Judicial de lo Contencioso Administrativo. Cundinamarca tiene 116 municipios más el Distrito Capital, y esta ultimo tiene Entidades del sector Central, del sector Descentralizado, Alcaldías Locales, lo que traduce a que al Tribunal Administrativo de Cundinamarca se remitieron aproximadamente de 1700 a 1800 actos administrativos para que sean de conocimiento de la Sala Plena, en razón de lo anterior prácticamente se ha paralizado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los asuntos de los que conoce la Sala Plena del Tribunal Administrativo de alguna manera tienen una prioridad frente a los demás asuntos salvo a los que la ley expresamente les da preferencia, pero cuando se consagra este Control Inmediato de Legalidad, se consagra con el fin de que las entidades territoriales tengan seguridad jurídica frente a los asuntos de su competencia y respecto de los cuales han acudido a expedir este tipo de Actos Administrativos.</p> <p>Ante esta situación y como consecuencia de un foro donde participaron un cumulo de Consejeros de Estado y Congresistas, se presentó un Proyecto de Ley desde el Senado de la República con el fin de que la Sala Plena no tuviera conocimiento de estos temas, si no que los conocieran las Secciones y Subsecciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que si bien se podrían presentar diferencias entre las subsecciones, se creara una especie de revisión especial en el mismo Tribunal ya sea a solicitud del Ministerio Público o de una subsección o de un Magistrado y para un caso puntual se llevaría a la Sala Plena.</p> <p>Esta medida incluida en el Decreto Legislativo 137 de 1994, lo que realmente desborda es esta declaratoria de Estado de Excepción que nunca nos imaginamos que ocurriera así y como consecuencia de ello por lo menos 160 Decretos Legislativos fueron expedidos por el Gobierno Nacional. Las Entidades Territoriales expidieron decretos de toda índole y el Tribunal esta contagiado, en relación con este punto se propone la modificación del artículo 185, que se le adicione</p>

<p>un párrafo o inciso donde se deje por sentado que estos temas los resuelvan las secciones o subsecciones del Tribunal Administrativo y en el evento de que exista disparidad en las decisiones se pueda llevar excepcionalmente a Sala Plena para que se unifique allí el criterio central de la decisión.</p> <p>En cuanto a las excepciones previas, en este momento hay dificultades en la interpretación en referencia a si el Magistrado Ponente debe responder o tiene que integrar una sala para resolver una excepción previa. Se propone darle competencia plena al Magistrado para que lo resuelva de manera unipersonal y no tenga que integrar la subsección para resolver una excepción previa (porque en el fondo esto solo dilataría el proceso) y por último si no se llegara a realizar de esta manera se generen de inmediato nulidades en el proceso de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Son bienvenidos los medios electrónicos que se incorporaron en el Decreto 806 de 2020, estos agilizan el proceso, entonces cabe incorporar este Decreto Legislativo a la Ley 1437 de 2011 ya que este tiene una vigencia corta. Se propone se incorporen todas estas medidas relacionadas con la tecnología de la información y de las comunicaciones que se pudiere replantear, inclusive la posibilidad de dictar sentencia por escrito sin la necesidad de iniciar una audiencia cuando el asunto sea eminentemente jurídico con el fin de acelerar el proceso, siendo ese planteamiento más que una posibilidad un deber ser.</p> <p>Se propone revisar el tema de las competencias territoriales en materia de reparaciones directas y acciones de grupo por que actualmente existe una dualidad que puede ser donde ocurrieron los hechos o en el domicilio principal de la entidad demandada y cuando estas son autoridades nacionales en su mayoría se encuentran en la ciudad de Bogotá, por ende, siempre terminan allí. Lo que se quiere con esto no es evadir la responsabilidad del Tribunal al contrario es acercarlos la justicia a esos ciudadanos de las entidades territoriales, entonces que sea el juez de allí que conozca del proceso y con ello se estaría facilitando el recaudo de la prueba (principio de la inmediación de la prueba).</p> <p>Una propuesta en concreto en cuanto al tema de la conciliación obligatoria consignada en el artículo 192, cuando hay una condena estas normalmente deben hacerse si la entidad es la demandada, pero en el 99 % la entidad demandada no concilia y para ese caso habría un desgaste de la jurisdicción, cuando se podría conceder directamente el recurso o dejar la audiencia de conciliación, pero a solicitud de la entidad demandada cuando realmente se observe que existe el ánimo conciliatorio.</p> <p>Por último, se necesita fortalecer los jueces y los tribunales, porque, así como reciben funciones deben recibir los medios, se necesita acelerar los recursos que se requieren para que puedan aumentar el número de jueces y magistrados que se puedan necesitar a resolver estos asuntos. Se habla de una comisión importante de seguimiento que debe ser fortalecida con el fin de que se esté evaluando el impacto de manera permanente de la reforma en materia administrativa.</p> <p><b><u>Procuraduría General de la Nación – Procurador delegado para la Conciliación Administrativa Dr. Iván Darío Gómez</u></b></p> <p>La Procuraduría General de la Nación ha sido testigo y participe de las reuniones del Consejo de Estado, órgano jurisdiccional que una vez más se encuentra gestionando una ley de política pública bajo un esquema de gestión pública como en su momento fuere la reforma para el CPACA. Esta primera reforma también tuvo paso por la comisión primera de la cámara de representantes, por ello hay que reconocer el trabajo del congreso de la República en la articulación de estas reformas a la</p>	<p>justicia y en particular de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por todo lo anterior, no dejan de ser un referente para las futuras reformas que se emprendan en la administración de justicia como lo es el Proyecto de Ley que ha radicado el Gobierno Nacional llamado “El Estatuto para la Conciliación Administrativa” en el cual la Procuraduría General de la Nación ha sido escuchada.</p> <p>La primera parte del Proyecto de Ley que reforma al CPACA sigue nutriéndose de directrices más precisas en materia de derechos de petición para los procesos sancionatorios que adelanta la Administración Pública. La procuraduría celebra que se lleven a legislación permanente varias de las reformas que se impulsaron con ocasión de la pandemia en relación con la digitalización de acuerdo a las disposiciones de los Decretos Legislativos 806 y 804 de 2020. También se logra vislumbrar un aspecto importante y es el Registro Único de Documentos ya que todo lo referente en materia de documentación y probatoria, será a futuro uno de los temas más importantes de estas actuaciones que se realizan de manera digital.</p> <p>Se consolidan las sentencias de unificación, esta es una de las grandes innovaciones que ha tenido el CPACA, y que van de la mano de las sentencias de extensión de la jurisprudencia con lo cual se logra evitar controversias y en cuanto a este tema la Procuraduría General de la Nación ha venido trabajando. Por otra parte, un punto importante es aportar de manera más precisa las reglas para la emisión de las providencias, en especial las proferidas en las llamadas salas cuando las decisiones las producen cuerpos colegiados, salas llamadas unipersonales o colegiadas según su naturaleza.</p> <p>En materia de sentencia de única instancia son relevantes los aportes que se hacen en relación a las competencias en materia de la Sala de Consulta y Servicio Civil, se destaca que el Proyecto de Ley en lo que tiene que ver con el Ministerio Público consolida las competencias, es un arduo trabajo de la mano del consejo de estado, para ejercer competencias en materia de conciliación y de solución de controversias.</p> <p>Se propone revisar el artículo 192 del CPACA y se recomienda que la audiencia no solo sea requerida por una de las partes, sino que también pueda ser solicitada por el agente del Ministerio Público, es decir, por el Procurador General de la Nación y que se deje por sentado que esa audiencia no tendrá un carácter obligatorio si no que quede a solicitud de partes y del Ministerio Público.</p> <p>Esta reforma al CPACA ha sido muy exitosa, ha tenido mucha legitimidad, mucha credibilidad, trae consigo una innovación interesante que son las audiencias públicas potestativas para asuntos de interés general y para sentencias de unificación lo que ha traduce a un acierto significativo de este Proyecto de Ley.</p> <p>El Dictamen Pericial se homologa con la regulación legislativa que tiene en el Código General del Proceso, y ahora que estamos conociendo estas dinámicas de los llamados Dictámenes de Parte existe una previsión normativa fundamental y es que se puedan decretar las pruebas de oficio como se hacen hoy en día, pero que sobretodo se puedan aportar Dictámenes Periciales para que los honorarios sean asumidos y tenga la posibilidad el juez de forjarse un criterio propio y no necesariamente un Dictamen de Parte.</p> <p>Se deja radicada una reflexión final y que no por ello se entienda se está en total desacuerdo con el planteamiento de homologar las competencias de los tribunales en los territorios donde hayan sucedido los hechos. Hay que valorar el hecho de que muchas entidades del orden Nacional tienen su</p>
<p>sede en la ciudad de Bogotá (mirándolo también desde la perspectiva de la capacidad que tengan las entidades nacionales para impulsar una adecuada defensa en los tribunales, no todas las entidades a nivel Nacional tienen una estructura robusta en dicha materia.</p> <p>Este es un tema ya debatido en Audiencia Pública en el Senado de la República por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de hecho con la experiencia que se tiene desde la Procuraduría General de la Nación en estos años, fungiendo como actores populares en más de 32 acciones, verbigracia en la acción popular de “La Ruta del Sol Dos”, que precisamente se tramitó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Odebrecht, hoy en día es el principal referente jurisprudencial que se tiene en América Latina de una condena a Odebrecht, además de la justicia de los Estados Unidos.</p> <p>Finalmente, ¿Se debió pensar en la posibilidad de cuál hubiera sido el Tribunal competente dentro de esos 622 kilómetros de vía de “La Ruta del sol”? Sin embargo, ya varias acciones han sido presentadas en la ciudad de Bogotá, aduciendo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene un amplio conocimiento en materia de Justicia en lo Contencioso Administrativo y se ha venido fortaleciendo con un capital técnico y capital social.</p> <p><b><u>Consejo Superior de la Judicatura – Presidenta Dra. Diana Alexandra Remolina Botía-</u></b></p> <p>Es oportuno señalar que el trámite del Proyecto de Ley 364 de 2020 Cámara - No. 007 de 2019 Senado es favorable para los intereses de la administración de justicia, dado que recoge la experiencia de la aplicación de la Ley 1437 de 2011 e introduce las modificaciones necesarias para tramitar en forma más ágil los procesos judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo representa el 8.2 % de la demanda de Justicia en todo el país. Los despachos de lo contencioso administrativo han tenido un crecimiento en la eficiencia para resolver los procesos, en el año 2019 estos despachos lograron aumentar su nivel de eficiencia en un promedio del 102 %, estas son unas cifras que vislumbran una mirada distinta a lo que se ha expuesto anteriormente en simples términos de ingresos y egresos, que nos permiten observar la capacidad de evacuación de los procesos por parte de los despachos de los jueces administrativos, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado.</p> <p>Lo que quiere decir esto es que los jueces de esta jurisdicción han tratado de evacuar la mayor cantidad de procesos que se pueden hacer año tras año; sin embargo y pese a este nivel de producción, la cantidad de jueces no es la requerida para asumir todos los procesos que están históricamente pendientes, por esta razón los inventarios finales de cada año crecen sin que los jueces tengan la capacidad de tramitar todos los procesos que se allegan a la Rama Judicial y a la vez descongestionan todos los procesos de años anteriores.</p> <p>Hoy en día en lo Contencioso Administrativo, para atender toda esta demanda de justicia se cuenta con 545 despachos en los distintos niveles (Juzgados Administrativos, Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado). Dada la nueva solicitud de redistribución de Competencias que se está planteando, lo más probable es que el número promedio de procesos por despacho aumente y en ese sentido la capacidad de la actual oferta de justicia se vería aún más desbordada y con lo cual veríamos afectada de manera negativa la eficiencia y la posibilidad de evacuar esos inventarios finales.</p>	<p>Estas cifras se traen a colación por que resultan relevantes para mostrarnos la realidad de lo Contencioso Administrativo y un panorama general que tiene que tenerse en cuenta para la creación de cargos y en particular de todas estas reformas que se pretenden introducir en el CPACA, más aún en medio de toda esta coyuntura económica al momento de asignar los recursos.</p> <p>El artículo 72 del proyecto de ley ordena al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo de Estado hacer análisis y tomar las decisiones correspondientes para calcular la demanda esperada de justicia, crear los nuevos despachos con el personal requerido, definir la dotación de la infraestructura y establecer planes de capacitación.</p> <p>Las funciones de Gobierno y Administración de la Rama Judicial, conforme a la Constitución Política y a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponden al Consejo Superior de la Judicatura. En particular, la creación de cargos y despachos, definir la infraestructura y la dotación de despachos judiciales, como los previstos en el Proyecto de Ley en comento, se encuentran atribuidos expresamente al Consejo Superior en los artículos 79 y 85.</p> <p>Conforme a lo anterior se recomienda aclarar el alcance de la norma según las competencias legalmente definidas actualmente, para evitar interpretaciones erradas que incluso pueden acarrear juicios sobre la constitucionalidad del artículo por superar el campo de acción del legislador ordinario al establecer en este artículo competencias que se encuentran definidas en normas estatutarias.</p> <p>La conformación de una Comisión de Acompañamiento y Seguimiento consignada en el artículo 73 del proyecto de ley para la implementación de una reforma tan ambiciosa, en la que será crítico asegurar los recursos presupuestales que permitan crear despachos judiciales en todo el país, es oportuna teniendo en cuenta que se incluye en ella a delegados del ejecutivo (Ministerios de Hacienda y de Justicia) que pueden facilitar la inclusión de ese aspecto en las leyes de presupuesto.</p> <p>No obstante lo anterior, la obligación del Consejo Superior de la Judicatura de atender “las observaciones o conceptos de la comisión sobre el cumplimiento o adopción de medidas”, sin perjuicio de la armónica colaboración que debe existir entre las ramas del Poder Público señalada en el artículo 113 de la Constitución Política, afecta la autonomía e independencia de la Rama Judicial y abre la puerta a la participación de autoridades de la Rama Ejecutiva en los asuntos propios del Gobierno y Administración de la Rama Judicial que gozan de una protección constitucional.</p> <p>En ese orden de ideas, se solicita respetuosamente modificar la redacción propuesta de manera que se salvaguarde la autonomía de la Rama Judicial para el manejo de los asuntos que pueden derivarse de la reforma propuesta, los cuales deben ser atendidos y resueltos en desarrollo con las funciones que hoy se encuentran previstas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Por último, se estima necesario evaluar cuidadosamente el régimen de transición para la adecuada aplicación de la nueva ley teniendo en cuenta que no se alinean el término para que el Gobierno Nacional disponga de los recursos necesarios para crear los cargos que demandan los cambios de competencias que se definen en el proyecto de ley, con el plazo de un año fijado en el artículo de vigencia para que rijan las nuevas normas a las demandas que se presenten a la jurisdicción, lo que puede afectar el cabal cumplimiento de los cambios que persigue este proyecto de ley.</p>

**V. MARCO NORMATIVO**

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República es competente para modificar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, esta norma dispone:

*“ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:*

*(...) 2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.”*

Así mismo el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 5 de 1992, establece como Función Legislativa a cargo del Congreso, reformar los códigos en todos los ramos de la legislación, como es el caso del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**VI. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA**

Tal como se señala en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, esta iniciativa se presenta en el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado en armonía con los planes fijados por el Gobierno nacional, con el fin de lograr la reforma que requiere el sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano.

Para este propósito, el Consejo de Estado, junto al Ministerio de Justicia y del Derecho proponen la revisión y ajuste de la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, contenido en la Ley 1437 de 2011, en procura de maximizar los recursos existentes para lograr una pronta, cumplida y eficiente administración de justicia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Según indicadores publicados en la página web institucional de la Rama Judicial existen índices de congestión elevados y los índices de evacuación total y parcial han descendido. En el año 2012 la evacuación total de procesos era del 44% y al primer semestre de 2017 era del 34%. Por su parte, el índice de evacuación parcial descendió del 84.1% en 2012 a 77.5% en 2017, mientras que el porcentaje de despachos permanentes que se encuentran con necesidad de intervención inmediata por el alto volumen de expedientes represados, permanece en el tiempo entre el 46% en 2012 y el 45% en 2017. La situación reflejada en estos indicadores ha conllevado a la pérdida de credibilidad en el sistema judicial dado que, aunque se resuelven los casos, la decisión se produce de manera tardía, por lo que, en muchos casos, resulta ineficaz.

Con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se implementó el proceso por audiencias en el proceso contencioso administrativo. Igualmente, se consagraron normas modernas en materia del trámite de los procedimientos administrativos. Estas medidas sirvieron para fortalecer la lealtad y franca interlocución entre el juez y las partes. Sin embargo, es un hecho aceptado en la comunidad jurídica y judicial que, en relación con las competencias asignadas, se han generado varias dificultades por la sobrecarga de asuntos que conoce el Consejo de Estado como juez de instancia, situación que ha impedido que ejerza contundentemente su labor de órgano unificador de la jurisprudencia. Por esta razón, un eje central de este proyecto de ley se refiere a varios ajustes normativos en esta materia, que tendrán por objeto redistribuir armónicamente las competencias entre los jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado.

Por otro lado, también el código presenta algunas antinomias y ambigüedades que generan inseguridad jurídica y dificultan el acceso a la administración de justicia. En efecto, varios estudios adelantados por el Consejo de Estado con apoyo en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla han demostrado que la hermenéutica de la Ley 1437 de 2011 no ha sido uniforme en el país, razón por la cual han proliferado tesis interpretativas, a veces contradictorias, que han generado cierto grado de incertidumbre procesal no deseable en la actividad judicial, entre muchas otras dificultades interpretativas, se enuncian, a título de ejemplo, las siguientes:

- a) La evidente contradicción entre lo dispuesto en el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 243 sobre autos apelables y
- b) La contradicción que existe entre los artículos 180 numeral 9 y 229 y siguientes del CPACA con lo regulado en el artículo 125 sobre competencia para proferir decisiones sobre medidas cautelares.

Estas dificultades interpretativas, que aún son objeto de análisis y esperan solución, han incrementado la carga de procesos en el órgano de cierre pese a las orientaciones jurisprudenciales al momento de resolver los recursos que diariamente conoce y resuelve.

Así mismo, la Ley 1437 de 2011 se construyó bajo la premisa que ante vacíos normativas se remitiría a las normas del Código de Procedimiento Civil; al entrar en vigor la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (CGP), se han incrementado las dudas en tanto la remisión normativa se ha complejizado. La regulación especial –a veces incompleta– de algunas instituciones procesales en la Ley 1437 de 2011, dificulta la concordancia con el Código General del Proceso, porque fueron eliminadas o cambiaron ostensiblemente en esta última codificación.

El Consejo de Estado y el Gobierno nacional consideran necesario plantear varias modificaciones que reflejan una reforma orientada a:

- 1. **Lograr un equilibrio armónico en las competencias de los jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:** Con el fin de garantizar la doble instancia, se pretende que las

decisiones sean más cercanas a los ciudadanos y fortalecer la función unificadora de jurisprudencia del Consejo de Estado.

Igualmente, dada la distribución actual de la carga laboral derivada de las normas de competencia, se presenta el fenómeno de «pirámide invertida» en la cual el Consejo de Estado tramita el mayor número de procesos en relación con el número de despachos con que cuenta, en comparación con los demás despachos de la jurisdicción:



Para solucionar la sobrecarga de trabajo que tiene actualmente el Consejo de Estado, se propone trasladar a Tribunales Administrativos en primera instancia algunas competencias que actualmente tiene el Consejo de Estado en única instancia. Así mismo, trasladar a los tribunales

y jueces en primera instancia algunas competencias que aquellos tienen en única instancia. Incrementar algunas cuantías en los procesos judiciales para que la mayor cantidad de asuntos contenciosos sean decididos en los juzgados y tribunales, y así el órgano de cierre sólo los conozca como juez de instancia en casos excepcionales.

Se pretende eliminar el factor cuantía como determinante para distribuir competencias en controversias de orden laboral, así como consolidar las garantías existentes en el ordenamiento jurídico colombiano al crear la doble instancia y la doble conformidad en procesos contra altos funcionarios del Estado, tal como ya se hizo en el proceso penal y con el proceso de pérdida de investidura. Igualmente, simplificar la competencia relacionada con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos que imponen sanciones disciplinarias, habida cuenta que aún persisten inconvenientes interpretativos sobre esta competencia.

Se busca precisar y modificar algunas normas de competencia para el control de actos electorales, haciendo más sencilla su determinación y evitar retrasos procesales y trasladar la competencia a los tribunales administrativos en primera instancia de varios asuntos que hoy se encuentran en el Consejo de Estado, como nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos expedidos por autoridades del orden nacional, los de asuntos mineros y petroleros y aquellos otros asuntos de carácter contencioso para los que no haya regla especial de competencia si la entidad involucrada es del orden nacional o departamental.

- 2. **Fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado:** La función unificadora del Consejo de Estado se ha dificultado por controversias interpretativas en el trámite del recurso extraordinario de revisión y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo cual se aclara en el proyecto.

Igualmente, se considera necesario diseñar un mecanismo que permita que todos los integrantes del Consejo de Estado puedan identificar en tiempo real los asuntos complejos, de importancia y relevancia que requieran decisiones de unificación, incluso estableciendo la posibilidad de que el Consejo de Estado pueda proferir autos de unificación de jurisprudencia, con el fin de que pueda consolidar criterios e interpretaciones en asuntos procesales y sustanciales que se evidencien, a través de este tipo de providencias y no solo en sentencias.

- 3. **Ajustar las normas sobre recursos ordinarios de reposición, apelación, queja y súplica:** Se han encontrado múltiples dificultades interpretativas relacionadas con la procedencia o improcedencia de recursos frente a determinadas decisiones, porque existe una atomización de normas que regulan los recursos. Así mismo, el efecto suspensivo como regla general del recurso de apelación, ha ocasionado que muchos procesos actualmente se encuentren paralizados a la espera de decisiones del órgano superior, por la falta de capacidad de respuesta dado el cúmulo de asuntos a su cargo, pese a que los procesos bien podrían haber continuado.

<p><b>4. Otras medidas para evitar conflictos interpretativos y agilizar el trámite de los procesos ante la jurisdicción:</b> Hay contradicción entre varias normas de la Parte Segunda del CPACA, sobre asuntos de procedimiento, como: providencias de sala y ponente, excepciones previas, el trámite del dictamen pericial. La reforma precisará que solo serán de sala aquellas providencias que sean estrictamente necesarias y que expresamente estén previstas como de competencia de las salas de decisión, las demás decisiones serán del magistrado ponente con el fin de agilizar el trámite de los procesos, el control sobre cualquiera de estas decisiones se hará a través del recurso de apelación o el de súplica, según se propone en la reforma.</p> <p>Igualmente es necesario hacer algunas precisiones terminológicas que originan controversias interpretativas, por ejemplo se elimina la obligación de dejar copia de la demanda y anexos en la secretaría a disposición de las partes y se incorpora la regla para que la notificación de la admisión de la demanda y del auto que libra mandamiento ejecutivo, así como de la demanda y sus anexos, se surta integralmente en mensaje de datos al correo electrónico, esto termina la dualidad del trámite de notificación por correo electrónico y envío físico. Además, se aclara la discusión sobre la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos judiciales y de las providencias que se le deben comunicar.</p> <p>Así mismo, se aclara el trámite del dictamen pericial. Se establece que esté podrá ser aportado, solicitado o decretado de oficio y se establecen reglas para que las entidades públicas puedan hacer uso de esta prueba con mayor facilidad, atendiendo las particularidades de la contratación estatal.</p> <p><b>5. Tecnologías de la información y comunicaciones en el proceso contencioso administrativo.</b> En el proyecto se modifica el artículo 186 para que el Consejo Superior de la Judicatura establezca en la jurisdicción contencioso administrativa las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer. Aunque el actual artículo regula lo relacionado con el expediente judicial electrónico, este es solo un elemento del conjunto de instrumentos necesarios para tener una transformación de la administración de justicia a partir del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Por lo anterior, se establece el deber de incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.</p>	<p>En el mismo artículo se dispone que las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Igualmente, se establece el deber de las partes de indicar en la demanda y en su contestación su canal digital (artículo 162 y 175 de la Ley 1437 de 2011), medida que permitirá que las actuaciones judiciales se materialicen a través de la virtualidad.</p> <p><b>6. Tecnologías de la información y comunicaciones en las actuaciones administrativas.</b> Con el fin de tener una administración pública más ágil, eficiente y cercana al ciudadano se modifican los artículos 5, 54, 56, 59, 60, 61 y 65 de la Ley 1437 de 2011 y se crean los artículos 53A y 60A. Estos cambios tienen por objeto implementar y promover el uso de los medios tecnológicos y electrónicos en los trámites y procedimientos administrativos ante las entidades públicas y en consecuencia acercar la administración pública al ciudadano.</p> <p><b>7. Prueba pericial.</b> Se modifica el trámite de la prueba pericial así: Se establece que la prueba pericial pueda ser i) aportada, ii) solicitada por las partes o iii) decretada de oficio por el juez. También se establece un trámite especial para el dictamen solicitado. Este incluye lo relativo a su contradicción. Adicionalmente, se regula lo referente a los honorarios y lista de peritos.</p> <p>Se adoptan reglas especiales para las entidades públicas. Se señala expresamente que estas pueden contratar de forma directa a los expertos que atenderán la prueba pericial en el proceso judicial, facultad que se mantiene durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2006, ley de garantías electorales.</p> <p><b>8. Necesidad de ampliar la oferta de justicia contenciosa administrativa:</b> Es de la mayor importancia para esta reforma la creación de nuevos despachos judiciales en los tribunales y juzgados administrativos, porque la demanda de la administración de justicia sigue en crecimiento y las reformas procedimentales por sí solas no coadyuvan a la descongestión. La capacidad de los despachos judiciales tiene unos límites en razón de la alta carga laboral esperada para cada uno de ellos.</p> <p>En la actualidad la jurisdicción de lo contencioso tiene un total de 342 juzgados administrativos y 176 despachos de magistrado. Entre el 2006 al 2008, el número de procesos que ingresaban anualmente a la jurisdicción se incrementó el 100%, de 73.150 en 2016 ascendió a 147.203 procesos en 2017, y en el año 2018 ingresaron 258.367 procesos.</p> <p>Ante la necesidad del traslado de nuevas competencias a los despachos de la base de esta jurisdicción, como se propone, y en simetría con el incremento de la demanda de justicia por parte de los habitantes del territorio, se requiere la creación de nuevos despachos judiciales. Por esta razón, se incorpora un artículo en la parte final del proyecto en el cual se establece el deber</p>
<p>del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado de analizar el impacto de la reforma y presentar un estudio detallado de las necesidades específicas de creación de nuevos despachos en la jurisdicción contenciosa administrativa y tomar las decisiones correspondientes previas las consultas que exige la Ley 270 de 1996.</p> <p><b>9. Reglas de transición y vigencia:</b> En relación con la transición normativa se propone una regla básica que genere mínimos inconvenientes y discusiones interpretativas. Por esa razón las nuevas competencias entrarán a regir para los procesos que se inicien después de un año de promulgada la ley. Este periodo de espera en su vigencia en materia de competencias es indispensable para realizar todos los estudios y ajustes que requiere la estructura de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear los nuevos despachos judiciales, así como para elaborar y concretar un programa especial de formación para los servidores.</p> <p>Igualmente, para evitar congestión judicial, los procesos que viene tramitando el Consejo de Estado deberá finalizarlos y no serán enviados a los tribunales y juzgados administrativos.</p> <p>Los demás temas de orden procesal que contiene el proyecto de ley se aplicarán en forma inmediata, de conformidad con las reglas generales de transición normativa en materia procesal, previstas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 reformado por el artículo 624 del Código General del Proceso.</p> <p><b>VII. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES</b></p> <p>Esta propuesta de revisión y ajuste de algunos aspectos del procedimiento que se sigue en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a fin de depurarlo en vista de las falencias detectadas por los operadores jurídicos de la jurisdicción durante los más de nueve (9) años de implementación de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Como se mostró en la exposición de motivos, y como se ha demostrado ampliamente en los distintos debates de control político y audiencias que se han adelantado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, las estadísticas demuestran elevados índices de congestión judicial, situación que tiene como efecto limitar el derecho fundamental de acceso eficiente y oportuno a la administración de justicia.</p> <p>Si bien la Ley 1437 de 2011, que reemplazó el Decreto 01 de 1984 anterior Código de lo Contencioso Administrativo, actualizó las normas que rigen la Administración Pública a los mandatos de la Constitución Política de 1991, además de modernizar la jurisdicción mediante la implementación de audiencias para evacuación de los procesos judiciales, se requiere dar un paso más a fin de mejorar</p>	<p>el sistema de administración de la justicia administrativa de forma que esta sea más eficiente en beneficio de los derechos de los ciudadanos.</p> <p>Adicionalmente, tal y como se señaló en la exposición de motivos, es un hecho aceptado en la comunidad jurídica y judicial que, por las competencias asignadas, hay dificultades por la sobrecarga de asuntos que conoce el Consejo de Estado como juez de instancia, situación que ha impedido que ejerza contundentemente su labor de órgano unificador de la jurisprudencia. Por esta razón, constituye un eje central de este proyecto la redistribución más armónica de las competencias entre los jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado.</p> <p>Por otra parte, teniendo en cuenta que entre los objetivos del proyecto, se encuentra mejorar el acceso y la prestación del servicio de a la justicia, así como los resultados de los procesos administrativos en el entendido que este constituye una materialización del Estado de derecho, los ponentes consideran necesario mantener los artículos que fueron incorporados en la ponencia para segundo debate en el Senado de la República y que fueron aprobados por la plenaria de dicha Corporación que tienen como propósito mejorar y hacer más expedito el proceso sancionatorio fiscal.</p> <p>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto Ley 403 de 2020, en lo no previsto en dicho Decreto Ley, el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal se sigue según lo que se establece en la parte Primera, Título III, Capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen o sustituyan. En consecuencia, al no estar previstos en normas especiales, los términos aplicables para las diferentes etapas del proceso administrativo sancionatorio fiscal, son aquellos consagrados de manera general en la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 47 y siguientes.</p> <p>Así las cosas, y teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales que impulsó la reforma al control fiscal del Acto Legislativo 04 de 2019, aprobado por este mismo Congreso, fue que se propendiera por la celeridad e inmediatez en su ejercicio, manifestándose entre otros aspectos mediante el ejercicio de un control que podrá ejercerse de manera preventiva y concomitante y que deberá realizarse mediante el seguimiento permanente al recurso público en tiempo real haciendo uso para el efecto de las tecnologías de la información, la articulación con el control social y el control interno, entre otros mecanismos, se considera necesario dar mayor celeridad a las etapas previstas en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, buscando así, que las finalidades que lo impulsan se puedan garantizar con una mayor prontitud, ante lo cual, se propone establecer términos especiales y expeditos para presentar descargos, una reducción en el periodo probatorio, para proferir decisión de primera instancia y para resolver recursos, garantizando siempre el respecto al principio del debido proceso y los derechos de defensa y contradicción.</p> <p>Precisado lo anterior, se tiene que para el cabal cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, cuando concurren las causales legalmente establecidas, los órganos de control fiscal se encuentran facultados para adelantar un proceso administrativo sancionatorio fiscal, el cual, de</p>

<p>conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Decreto Ley 403 de 2020, propende por el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión fiscal.</p> <p>Las sanciones administrativas fiscales no tienen naturaleza disciplinaria ni indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con esas modalidades de responsabilidad y proceden a título de imputación de culpa o dolo.</p> <p>En tal sentido, este procedimiento administrativo, más allá de pretender una sanción propiamente dicha, propende por dar un impulso a los ejercicios de vigilancia y control fiscal, en el desarrollo de las diferentes auditorías sectoriales o en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, por lo que se considera pertinente dar herramientas para que dicho procedimiento pueda cumplir el objetivo para el cual fue creado.</p> <p>Adicionalmente, se desarrolla a nivel normativo la “suspensión provisional en el proceso administrativo sancionatorio fiscal”, contemplando su procedencia bajo la condición de que se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere, a fin de garantizar que la sanción sea eficaz y oportuna mediante la protección y salvaguarda de los elementos de prueba.</p> <p><b>VIII. CONFLICTO DE INTERÉS</b></p> <p>El artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, establece que:</p> <p>El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congreso pueda encontrar [...]</p> <p>El régimen de conflicto de intereses de los congresistas está consagrado en el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 2003 de 2019. Así, la citada disposición establece:</p> <p><b>Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas.</b> Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.</p>	<p>a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.</p> <p>b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.</p> <p>c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.</p> <p>Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:</p> <p>a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.</p> <p>b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.</p> <p>c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.</p> <p>d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.</p> <p>e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.</p> <p>f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.</p> <p>Parágrafo 1º. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se quieren apartar de la discusión y votación del proyecto.</p> <p>Parágrafo 2º. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de investigación.</p>
<p>Parágrafo 3º. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5ª de 1992.</p> <p>En lo que respecta a la jurisprudencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló en sentencia del 28 de enero de 2020 (Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02135-01(PI)) los requisitos que deben acreditarse para que tenga lugar una violación al régimen de conflicto de intereses. Así, en dicha oportunidad se indicó:</p> <p>A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –numeral 1-, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art. 18-), la jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado[43] –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha señalado los requisitos concurrentes que necesariamente deben estar acreditados para la estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, así:</p> <p>“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.</p> <p>En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida de investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano”, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura cuando se observa: a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, incluso moral- del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso; b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular.</p> <p>Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de violación del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma personal, a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o, a sus socios, y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal de pérdida de investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto, si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada.</p> <p>Como se evidencia del texto anterior, uno de los requisitos señalados por el Consejo de Estado es la presencia de un interés directo, particular e inmediato del congresista o su círculo cercano,</p>	<p>el cual demanda para su configuración que el beneficio recibido “no sea general sino particular”.</p> <p>En el caso del Proyecto de Ley que se somete a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes, a pesar de que, de llegarse a aprobar el proyecto, varias de sus disposiciones aplicarían a procesos en curso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su contenido no está dirigido a beneficiar de manera particular a los congresistas o sus familiares, respecto de los procesos en los que actualmente intervienen ante la referida jurisdicción, pues la reforma a la Ley 1437 de 2011 busca beneficiar a todos los ciudadanos de manera general en condiciones de igualdad.</p> <p>En línea con lo anterior, durante la discusión del proyecto de ley en la Plenaria del Senado de la República se rechazaron conflictos de interés sustentados en el hecho de que en la jurisdicción contenciosa administrativa y en el Consejo de Estado existían procesos en los que eran parte los honorables senadores de la República (procesos de nulidad electoral, pérdida de investidura, entre otros), o sus familiares.</p> <p><b>IX. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En atención a la proposición presentada por el H.R. Juan Carlos Losada Vargas en el debate en la Comisión Primera Constitucional, por la cual se puso de presente que el proyecto de ley incluía dos expresiones que no corresponden con las que se suelen utilizar en la técnica legislativa, en el pliego de modificaciones se realizarán los ajustes solicitados, de acuerdo con lo señalado por los ponentes durante la discusión.</li> <li>- Se ajusta la redacción del artículo 82 y se establece que el gobierno creará mesas de trabajo para que asesoren y apoyen a las entidades públicas del orden nacional en la decisión de los recursos de apelación (artículo 16 de la ponencia).</li> <li>- Se realizaron ajustes de redacción a los artículos 47A, 102, 131, 132, 157, 175, 182B, 199, 219, 241, 245, 246, 247 y 271 (artículos 4, 17, 21, 22, 32, 38, 43, 48, 55, 60, 65, 66, 67, 79 y 87 de la ponencia).</li> <li>- En el artículo 20, se elimina el literal i) del numeral 2º del artículo 125 dado que no hay apelación contra la providencia que decide la excepción previa. La decisión que es apelable es la que ponga fin al proceso.</li> <li>- En el artículo 42 se ajusta la redacción del artículo 182A para aclarar y simplificar los casos en que procede la sentencia anticipada, especialmente cuando tiene lugar antes de la audiencia inicial.</li> <li>- Se propone que el artículo 45, que pretende adicionar el artículo 185A a la Ley 1437 de 2011, contemple que la sentencia proferida en ejercicio del control automático de legalidad sea susceptible del recurso de apelación, decidido por salas especiales conformadas por la corporación competente, precisando que en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta por una sala especial diferente</li> </ul>

- a aquella que tomó la decisión. Se pretende garantizar el principio de la doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia.
- En el artículo 47 se ajusta el artículo 188 para aclarar la redacción y establecer que se condenará en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
- En el artículo 48, que modifica el artículo 199, se incluye que la demanda y sus anexos deberán ser notificada al Ministerio Público, con el fin de garantizar su participación en los procesos contenciosos.
- Al artículo 62, que modifica el artículo 241, se le incluyen cuatro (4) párrafos que aclaran el efecto y trámite del recurso de apelación y de la apelación.
- En el artículo 84, se aclara el trámite de las recomendaciones que haga la comisión al Consejo Superior de la Judicatura sobre la implementación de la reforma.
- Se incluye la derogatoria del artículo 148A de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que establece un trámite preferencial al Control Jurisdiccional de los Fallos con Responsabilidad Fiscal y, habida cuenta que el presente Proyecto de Ley incorpora un Control Automático de Legalidad y describe el trámite de mismo, no sería aplicable lo contenido en el referido artículo.

**X. PLIEGO DE MODIFICACIONES**

Texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara	Texto propuesto para segundo debate ante la H. Plenaria de Cámara	Observaciones
<p><b>Artículo 1.</b> Modifícase los numerales 1 y 9 y adiciónense los numerales 10 y 11 al artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades.</b> En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:</p> <p>1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o</p>	<p><b>Artículo 1.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> los numerales 1 y 9 y adiciónense los numerales 10 y 11 al artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades.</b> En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:</p> <p>1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o</p>	Se hace ajuste de forma.

<p>por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.</p> <p>9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.</p> <p>10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.</p> <p>11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.</p>	<p>por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.</p> <p>Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.</p> <p>9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.</p> <p>10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.</p> <p>11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.</p>	
<p><b>Artículo 2.</b> Modifícase el inciso 3° del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa.</b> Los conflictos de competencia</p>	<p><b>Artículo 2.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el inciso 3° del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa.</b> Los conflictos de competencia</p>	Se hace ajuste de forma.

<p>administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.</p> <p>De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.</p> <p>En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar</p>	<p>administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.</p> <p>De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.</p> <p>En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar</p>	
---	---	--

<p>alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.</p> <p>Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.</p>	<p>alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.</p> <p>Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.</p>	
<p><b>Artículo 3.</b> Modifícase el párrafo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónase un párrafo al mismo artículo, así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días.</p>	<p><b>Artículo 3.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el párrafo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y <del>adiciónase</del> <b>adiciónense</b> un párrafo al mismo artículo, así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días.</p>	Se hace ajuste de forma.
<p><b>Artículo 4.</b> Adiciónase el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento</b></p>	<p><b>Artículo 4.</b> <del>Adiciónase</del> <b>Adiciónense</b> el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento</b></p>	Se hace ajuste de forma y redacción.

<p><b>administrativo sancionatorio fiscal.</b> Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.</p> <p>El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.</p> <p>El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento.</p> <p>Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente comunicará la</p>	<p><b>administrativo sancionatorio fiscal.</b> Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.</p> <p>El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.</p> <p>El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento.</p> <p>Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente comunicará la</p>	<p>decisión al afectado, quien contará con tres (3) días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, quien contará con diez (10) días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta.</p> <p>Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido de la suspensión provisional.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción.</p> <p>No obstante, la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La facultad prevista en el presente artículo</p>	<p>decisión al afectado, quien contará con tres (3) días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, quien contará con diez (10) días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta.</p> <p>Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido de la suspensión provisional.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción.</p> <p>No obstante, la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La facultad prevista en el presente artículo</p>		
<p>será ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 5.</b> Adiciónase un parágrafo al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para la práctica de pruebas no será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado será por cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 6.</b> Adiciónase un parágrafo al artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se preferirá el acto administrativo definitivo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los alegatos.</p> <p>Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberán cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.</p>	<p>será ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 5.</b>—Adiciónase <b>Adiciónase</b> un parágrafo al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para la práctica de pruebas no será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado será por cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 6.</b>—Adiciónase <b>Adiciónase</b> un parágrafo al artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se preferirá el acto administrativo definitivo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los alegatos.</p> <p>Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberán cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 7.</b> Adiciónase el artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado.</p> <p>El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar.</p> <p>El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no</p>	<p><b>Artículo 7.</b> Adiciónase el artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado.</p> <p>El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar.</p> <p>El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no</p>	<p>Sin modificaciones</p>

<p>se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.</p> <p>Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno</p>	<p>se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.</p> <p>Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno</p>		<p>por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos.</p>	<p>uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos.</p>	
<p><b>Artículo 8.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 53A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 53A. Uso de medios electrónicos.</b> Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento.</p> <p>El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos</p>	<p><b>Artículo 8.</b> Adiciónase <b>Adiciónase</b> a la Ley 1437 de 2011 el artículo 53A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 53A. Uso de medios electrónicos.</b> Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento.</p> <p>El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 9.</b> Modificanse los incisos primero y segundo del artículo 54 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 9.</b>—<del>Modificanse</del> <b>Modifíquense</b> los incisos primero y segundo del artículo 54 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace modificación de forma</p>
<p><b>Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos.</b> Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio.</p> <p>Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.</p> <p>El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el Régimen General de Protección de Datos Personales.</p>	<p><b>Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos.</b> Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio.</p> <p>Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.</p> <p>El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el Régimen General de Protección de Datos Personales.</p>		<p><b>Artículo 10.</b> Modificase el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 10.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 56 de</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 56. Notificación electrónica.</b> Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.</p> <p>Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.</p> <p>Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.</p> <p>Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.</p> <p>La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración.</p>	<p>la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 56. Notificación electrónica.</b> Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.</p> <p>Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.</p> <p>Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.</p> <p>Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.</p> <p>La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser</p>		<p><b>Artículo 11.</b> Modificase el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 59. Expediente electrónico.</b> El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.</p> <p>Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión documental.</p>	<p>certificado por la administración.</p> <p><b>Artículo 11.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 59. Expediente electrónico.</b> El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.</p> <p>Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión documental.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 12.</b> Modificase el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 12.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 60 de</p>				<p>Se hace ajuste de forma.</p>

<p><b>Artículo 60. Sede electrónica.</b> Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno nacional.</p> <p>Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.</p>	<p>la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 60. Sede electrónica.</b> Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno nacional.</p> <p>Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.</p>		<p>Información y las Comunicaciones.</p> <p>Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y actualización de la información y de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio.</p>	<p>Información y las Comunicaciones.</p> <p>Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y actualización de la información y de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio.</p>	
<p><b>Artículo 13.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 60A, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p><b>Artículo 13.—Adiciónase Adiciónese</b> a la Ley 1437 de 2011 el artículo 60A, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 14.</b> Modifícase el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 14. Modifícase Modifíquese</b> el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 60A. Sede electrónica compartida.</b> La sede electrónica compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la</p>	<p><b>Artículo 60A. Sede electrónica compartida.</b> La sede electrónica compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la</p>		<p><b>Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades.</b> Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos, además de:</p> <p>1. Llevar un estricto control y relación de los documentos</p>	<p><b>Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades.</b> Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos, además de:</p>	
<p>electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.</p> <p>2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.</p> <p>3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado.</p>	<p>1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.</p> <p>2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.</p> <p>3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado.</p>		<p>garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.</p> <p>Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.</p> <p>En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.</p> <p><b>Parágrafo.</b> También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.</p>	<p>territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.</p> <p>Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.</p> <p>En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.</p> <p><b>Parágrafo.</b> También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.</p>	
<p><b>Artículo 15.</b> Modifícase el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 15. Modifícase Modifíquese</b> el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 16.</b> Adiciónese el siguiente inciso al artículo 82 de la Ley 1437 de 2011.</p>	<p><b>Artículo 16.</b> Adiciónese el siguiente inciso al artículo 82 de la Ley 1437 de 2011.</p>	<p>Se ajusta la redacción del artículo y se establece que el</p>
<p><b>Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general.</b> Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.</p> <p>Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las</p>	<p><b>Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general.</b> Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.</p> <p>Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta</p>				

<p>El Gobierno Nacional podrá crear grupos de trabajo por cada sector administrativo, con carácter temporal o permanente, para revisar y aprobar o improbar los proyectos de decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por las entidades adscritas y vinculadas para los casos en los que en la respectiva reglamentación se estime procedente la aplicación de este mecanismo. Las entidades territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente inciso.</p>	<p>El Gobierno Nacional podrá crear <del>grupos</del> <u>mesas</u> de trabajo por cada sector administrativo, con carácter temporal o permanente, <del>para revisar y aprobar o improbar los proyectos de</del> <u>con funcionarios de distintas entidades públicas, para apoyarlas y asesorarlas en la</u> decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por las entidades adscritas y vinculadas para los casos en los que <del>en la respectiva reglamentación se estime procedente la aplicación de este mecanismo del orden nacional de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se expida.</del> Las entidades territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente inciso.</p> <p><u>El apoyo y asesoramiento de las mesas de trabajo no es vinculante para el funcionario que resuelve el recurso de apelación.</u></p>	<p>gobierno creará mesas de trabajo para que asesoren y apoyen a las entidades públicas del orden nacional en la decisión de los recursos de apelación.</p>	<p>unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.</p>	<p>unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.</p>	
<p><b>Artículo 17.</b> Modifíquese el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 102.</b> Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de</p>	<p><b>Artículo 17.</b> Modifíquese el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 102.</b> Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de</p>	<p>Se ajusta redacción.</p>	<p>Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:</p>	<p>Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:</p>	
<p>el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.</p>	<p>el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.</p>		<p>2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.</p>	<p>2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.</p>	
<p>La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.</p>	<p>La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.</p>		<p>Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.</p>	<p>Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.</p>	
<p>Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <p>1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuales son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.</p>	<p>Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y <del>las autoridades podrán</del> negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <p>1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuales son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.</p>		<p>La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p>	<p>La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p>	
<p>Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiera no hacerlo o, en su</p>	<p>Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiera no hacerlo o, en su</p>		<p>Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia,</p>	<p>Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia,</p>	

<p>caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.</p>	<p>caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.</p>		<p>7. Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a recurso alguno.</p>	<p>integrada por cuatro (4) Magistrados.</p>	
<p><b>Artículo 18.</b> Modificanse los numerales 3 y 4 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p>3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código.</p> <p>4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este código.</p>	<p><b>Artículo 18.</b> <del>Modificanse</del> <b>Modifíquese</b> los numerales 3 y 4 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p>3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código.</p> <p>4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este código.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.</p>	<p>7. Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a recurso alguno.</p> <p>Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.</p>	
<p><b>Artículo 19.</b> Modificanse el inciso primero y los numerales 7 y 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p><b>Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil.</b> La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados.</p>	<p><b>Artículo 19.</b> <del>Modificanse</del> <b>Modifíquese</b> el inciso primero y los numerales 7 y 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p><b>Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil.</b> La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Estará</p>	<p>Se hace modificación de forma.</p>	<p>La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.</p> <p>En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La</p>	<p>Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.</p> <p>La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.</p> <p>En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al juez o magistrado</p>	
<p>comunicación suspenderá el proceso judicial.</p> <p>El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:</p> <p>a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma clara y completa, los hechos que dan origen a la controversia, y acompañarse de los documentos que se estimen pertinentes. Asimismo, deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de la discrepancia, en relación con los cuales se pida el concepto.</p> <p>b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades involucradas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes.</p> <p>c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el consejero ponente podrá decretar pruebas en los términos dispuestos en este código.</p> <p>d) Una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda la información necesaria, la Sala emitirá el concepto solicitado dentro de</p>	<p>ponente que se solicitó concepto a la Sala. La comunicación suspenderá el proceso judicial.</p> <p>El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:</p> <p>a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma clara y completa, los hechos que dan origen a la controversia, y acompañarse de los documentos que se estimen pertinentes. Asimismo, deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de la discrepancia, en relación con los cuales se pida el concepto.</p> <p>b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades involucradas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes.</p> <p>c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el consejero ponente podrá decretar pruebas en los términos dispuestos en este código.</p> <p>d) Una vez cumplido el</p>		<p>los noventa (90) días siguientes. No obstante, este plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más, de oficio o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no conocidos por la Sala en el trámite del concepto.</p> <p>10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.</p>	<p>necesaria, la Sala emitirá el concepto solicitado dentro de los noventa (90) días siguientes. No obstante, este plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más, de oficio o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no conocidos por la Sala en el trámite del concepto.</p> <p>10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se elimina el numeral i) dado que no hay apelación contra la providencia que decide la excepción previa. La decisión que es apelable es la que ponga fin al proceso.</p>
<p><b>Artículo 20.</b> Modificase el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 125. De la expedición de providencias.</b> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:</p>	<p><b>Artículo 20.</b> <del>Modificase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 125. De la expedición de providencias.</b> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:</p>				

<p>1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.</p> <p>2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:</p> <p>a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código.</p> <p>b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código;</p> <p>c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;</p> <p>d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código;</p> <p>e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia;</p> <p>f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares, serán de sala.</p>	<p>1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.</p> <p>2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:</p> <p>a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código.</p> <p>b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código;</p> <p>c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;</p> <p>d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código;</p> <p>e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia;</p> <p>f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares, serán de sala.</p>	
<p>observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando en un Magistrado concorra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.</p> <p>Sólo se ordenará sorteo de conjuéz, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma</p>	<p>de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando en un Magistrado concorra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.</p> <p>Sólo se ordenará sorteo de conjuéz, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el</p>	
<p>g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se proferian en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas.</p> <p>h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.</p> <p>i) Las que deciden el recurso de apelación contra las excepciones previas. En primera instancia esta decisión será de ponente. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y el Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será aplicable.</p> <p>3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.</p> <p><b>Artículo 21.</b> Modificase los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 131. Trámite de los impedimentos.</b> Para el trámite de los impedimentos se</p>	<p>g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se proferian en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas.</p> <p>h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.</p> <p><del>i) Las que deciden el recurso de apelación contra las excepciones previas. En primera instancia esta decisión será de ponente. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y el Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será aplicable.</del></p> <p>3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.</p> <p><b>Artículo 21.</b> <del>Modificase</del> <b>Modifíquense</b> los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 131. Trámite de los impedimentos.</b> Para el trámite</p>	<p>Se hacen ajustes de forma.</p>
<p>sección o subsección continúe el trámite del mismo.</p> <p>5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuéces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 22.</b> Modificase los numerales 3 y 5 del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 132. Trámite de las recusaciones.</b> Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano</p>	<p>expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo.</p> <p>5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado <del>relacionado con</del> la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuéces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 22.</b> <del>Modificase</del> <b>Modifíquense</b> los numerales 3 y 5 del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 132. Trámite de las recusaciones.</b> Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o</p>	<p>Se hacen ajustes de forma.</p>

<p>sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o secciones que indique el reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuer, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuer, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 23.</b> Adiciónese el artículo 136A de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 136 A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de</p>	<p>subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o secciones que indique el reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuer, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce del tema <del>relacionado con</del> la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuer, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 23.</b> Adiciónese el artículo 136A de la Ley 1437 de 2011, <u>el cual quedará</u> así:</p> <p><b>Artículo 136A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de</p>	<p>Modificación de forma.</p>	<p>legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías territoriales.</p> <p>Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaria del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo.</p> <p><b>Artículo 24.</b> Modifícase el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.</b> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden</p>	<p>legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías territoriales.</p> <p>Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaria del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo.</p> <p><b>Artículo 24. Modifícase Modifíquese</b> el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.</b> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.</p> <p>2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden nacional.</p> <p>3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.</p> <p>4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la</p>	<p>las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.</p> <p>2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden nacional.</p> <p>3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.</p> <p>4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la</p>	<p>Modificación de forma.</p>	<p>Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.</p> <p>5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.</p> <p>6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.</p> <p>7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de</p>	<p>Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.</p> <p>5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.</p> <p>6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.</p> <p>7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de elección y nombramiento</p>	<p>Modificación de forma.</p>

<p>Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido o nombrado haya sido postulado por esta última corporación.</p> <p><b>Artículo 25.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 149A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad.</b> El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la República, congresistas, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos, de</p>	<p>efectuados por el Consejo de Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido o nombrado haya sido postulado por esta última corporación.</p> <p><b>Artículo 25.</b>—Adiciónase <b>Adiciónase</b> a la Ley 1437 de 2011 el artículo 149A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad.</b> El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la República, congresistas, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos, de las</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p><b>Artículo 26.</b> Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.</b> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.</p> <p><b>Artículo 27.</b> Modifícase el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:</p>	<p>Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p><b>Artículo 26.</b> Modifícase <b>Modifícase</b> el inciso primero del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.</b> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.</p> <p><b>Artículo 27.</b> Modifícase <b>Modifícase</b> el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral.</p> <p>En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el Vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción.</p> <p>En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo</p>	<p>comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral.</p> <p>En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el Vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción.</p> <p>En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>1. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.</p> <p>2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.</p> <p>3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.</p> <p>4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.</p> <p>5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital de Bogotá.</p> <p>6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p>	<p>1. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.</p> <p>2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.</p> <p>3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.</p> <p>4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.</p> <p>5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital de Bogotá.</p> <p>6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>

<p>a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;</p> <p>b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes de los distritos y de los municipios de menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial o equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades</p>	<p>a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;</p> <p>b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes de los distritos y de los municipios de menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial o equivalente a cualquiera de estos niveles</p>		<p>del orden nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.</p> <p>7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales. Esta competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.</p> <p>8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 28.</b> Modifícase el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 152. Competencia de los tribunales</b></p>	<p>efectuado por las autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.</p> <p>7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales. Esta competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.</p> <p>8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 28. Modifícase el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p>	<p>Se hace modificación de forma</p>
<p><b>administrativos en primera instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a quinientos (500) salarios</p>	<p><b>Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a</p>		<p>mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la</p>	<p>quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos</p>	

<p>competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p>Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p> <p>a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de</p>	<p>señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p>Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p> <p>a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores</p>		<p>municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento.</p> <p>c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado.</p> <p>d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal.</p> <p>e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del mandato de gobernadores y</p>	<p>distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento.</p> <p>c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado.</p> <p>d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal.</p> <p>e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del</p>	
<p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado.</p> <p>10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.</p> <p>12. De los que se promuevan contra los actos de</p>	<p>mandato de gobernadores y alcaldes.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado.</p> <p>10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.</p>		<p>expropiación por vía administrativa.</p> <p>13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.</p> <p>14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.</p> <p>15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.</p>	<p>12. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.</p> <p>13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.</p> <p>14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.</p> <p>15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección Primera del Tribunal</p>	

<p>17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>19. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.</p> <p>20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.</p> <p>21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.</p>	<p>Administrativo de Cundinamarca.</p> <p>17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>19. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.</p> <p>20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.</p> <p>21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de</p>		<p>22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A.</p> <p>24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios.</p> <p>25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación o registro.</p> <p>26. De todos los demás de carácter contencioso</p>	<p>expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.</p> <p>22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A.</p> <p>24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios.</p> <p>25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación o registro.</p>	
<p>administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p><b>Artículo 29.</b> Modificase el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 154. Competencia de los juzgados administrativos en única instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en única instancia:</p> <p>1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.</p> <p>2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de</p>	<p>26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p><b>Artículo 29. Modifícase Modifíquese</b> el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 154. Competencia de los juzgados administrativos en única instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en única instancia:</p> <p>1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.</p> <p>2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de</p>	<p>Se hace modificación de forma.</p>	<p>conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 30.</b> Modificase el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía.</p>	<p>conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 30. Modifícase Modifíquese</b> el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>

<p>3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	<p>3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>		<p>7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.</p> <p>9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por</p>	<p>7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.</p> <p>9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por</p>	
<p>cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos. Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.</p> <p>11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.</p> <p>13. De los de nulidad de los actos administrativos de los</p>	<p>cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos. Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.</p> <p>11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.</p> <p>13. De los de nulidad de los actos administrativos de los</p>		<p>distritos y municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo de Estado.</p> <p>15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p>17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.</p>	<p>distritos y municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo de Estado.</p> <p>15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p>17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.</p>	

<p><b>Artículo 31.</b> Modificase el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 156. Competencia por razón del territorio.</b> Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:</p> <p>1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de certificación o registro, por el lugar donde se expidió el acto.</p> <p>2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales o en laudos arbitrales derivados de tales</p>	<p><b>Artículo 31. Modificase Modificase</b> el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 156. Competencia por razón del territorio.</b> Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:</p> <p>1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de certificación o registro, por el lugar donde se expidió el acto.</p> <p>2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales o en laudos</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>contratos, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.</p> <p>5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación del bien.</p> <p>6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada a elección de la parte actora.</p> <p>7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda;</p>	<p>arbitrales derivados de tales contratos, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.</p> <p>5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación del bien.</p> <p>6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada a elección de la parte actora.</p> <p>7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en</p>	
<p>en los demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.</p> <p>8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.</p> <p>9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competencia se fijará por el lugar de la sede principal de la entidad demandada, en Colombia.</p> <p>10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante.</p> <p>11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia en el domicilio del demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestarse el servicio.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado primero la demanda.</p>	<p>los casos en que esta proceda; en los demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.</p> <p>8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.</p> <p>9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competencia se fijará por el lugar de la sede principal de la entidad demandada, en Colombia.</p> <p>10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante.</p> <p>11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia en el domicilio del demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestarse el servicio.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado primero la demanda.</p>		<p><b>Artículo 32.</b> Modificase el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.</b> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.</p> <p>La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, sin incluir los que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.</p> <p>Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.</p> <p>En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la</p>	<p><b>Artículo 32.— Modificase Modificase</b> el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.</b> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.</p> <p>La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, <del>sin incluir los que se causen con posterioridad</del> <b>causados hasta</b> la presentación de aquella.</p> <p>Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.</p> <p>En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse</p>	<p>Se hacen ajustes de redacción.</p>

<p>cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.</p> <p>En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.</p>	<p>de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.</p> <p>En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.</p>		<p>distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.</p>	<p>un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.</p>	
<p><b>Artículo 33.</b> Modifícase el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 158. Conflictos de competencia.</b> Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:</p> <p>Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro</p>	<p><b>Artículo 33. Modifícase <del>Modifícase</del></b> el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 158. Conflictos de competencia.</b> Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:</p> <p>Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.</p>	<p>Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.</p>	
			<p>Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.</p>	<p>Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.</p>	
			<p>La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.</p>	<p>La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.</p>	
			<p><b>Artículo 34.</b> Modifícase el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 34.</b> Modifícase el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Sin modificaciones</p>
<p><b>Artículo 161. Requisitos previos para demandar.</b> La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</p> <p>El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.</p>	<p><b>Artículo 161. Requisitos previos para demandar.</b> La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</p> <p>El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.</p>		<p><b>Artículo 35.</b> Modifícase el numeral 7 y adiciónase un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 35. Modifícase <del>Modifícase</del> y <del>adiciónase</del> <b>adiciónese</b></b> el numeral 7 y un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
			<p>7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p>	<p>7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p>	
			<p>8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.</p>	<p>8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.</p>	
			<p>En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación</p>	<p>En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la</p>	

<p>personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.</p>	<p>demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.</p>		<p><b>Artículo 38.</b> Modificase el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p><b>Artículo 38.</b> Modificase <b>Modifíquese</b> el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p>Se hace ajuste de redacción.</p>
<p><b>Artículo 36.</b> Modificase el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 36.</b> Modificase <b>Modifíquese</b> el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Parágrafo 2°.</b> De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.</p>	<p><b>Parágrafo 2°.</b> De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.</p>	<p>Se aclara que el juez o magistrado ponente, según el caso, es el competente para decidir sobre decreto de pruebas para resolver las excepciones previas.</p>
<p><b>Artículo 174. Retiro de la demanda.</b> El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.</p> <p>Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la demanda.</p>	<p><b>Artículo 174. Retiro de la demanda.</b> El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.</p> <p>Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la demanda.</p>		<p>Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.</p> <p>Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, el juzgador declarará</p>	<p>Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el <del>juzgador</del> <b>juez o magistrado ponente</b> las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.</p> <p>Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para</p>	<p>Se simplifica la redacción para hacerla concordante con el artículo 125 y 243.</p>
<p><b>Artículo 37.</b> Modificase el numeral 7 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 37.</b> Modificase <b>Modifíquese</b> el numeral 7 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>			
<p>7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p>	<p>7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p>				
<p>la terminación del proceso cuando advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.</p> <p>Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.</p>	<p>decidir las excepciones previas, <b>se</b> declarará la terminación del proceso cuando <b>se</b> advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.</p> <p>Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.</p>		<p>Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.</p>	<p>la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.</p>	
<p><b>Artículo 39.</b> Modificase el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 39.</b> Modificase <b>Modifíquese</b> el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.</p>	<p>Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.</p>	
<p><b>Artículo 179. Etapas.</b> El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:</p>	<p><b>Artículo 179. Etapas.</b> El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:</p>		<p>También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes.</p>	<p>También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes.</p>	
<p>1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.</p> <p>2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y</p> <p>3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia.</p>	<p>1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.</p> <p>2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y</p> <p>3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta</p>		<p>Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutive.</p>	<p>Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutive.</p>	
			<p><b>Artículo 40.</b> Modificanse los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:</p>	<p><b>Artículo 40.</b> Modificase <b>Modifíquese</b> los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
			<p>6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá</p>	<p>6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá</p>	

<p>las excepciones previas pendientes de resolver.</p> <p><b>8.</b> Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.</p> <p>No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación</p> <p><b>9.</b> Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.</p> <p>En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Las audiencias relativas a procesos donde</p>	<p>las excepciones previas pendientes de resolver.</p> <p><b>8.</b> Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.</p> <p>No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación</p> <p><b>9.</b> Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.</p> <p>En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Las audiencias relativas a procesos donde</p>		<p>exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada.</p> <p><b>Artículo 41.</b> Modifícase el numeral 2 del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>2.</b> Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p><b>Artículo 42.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182A. Sentencia anticipada.</b> El juzgador deberá dictar sentencia anticipada:</p> <p>1. Antes de la audiencia inicial: cuando se trate de asuntos de puro derecho; cuando no haya que practicar pruebas; cuando solo se haya pedido tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; o cuando las pruebas solicitadas deban ser rechazadas por impertinentes, inconducentes o inútiles. En este caso el juzgador, mediante</p>	<p>exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada.</p> <p><b>Artículo 41.</b> Modifícase el numeral 2 del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>2.</b> Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p><b>Artículo 42.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182A. Sentencia anticipada.</b> El juzgador deberá <del>Se podrá</del> dictar sentencia anticipada:</p> <p>1. Antes de la audiencia inicial:</p> <p><b>a)</b> Cuando se trate de asuntos de puro derecho;</p> <p><b>b)</b> Cuando no haya que practicar pruebas;</p> <p><b>c)</b> Cuando solo se haya pedido <del>se solicite</del> tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se ajusta la redacción del primer inciso para hacerlo concordante con el artículo 125.</p> <p>Se ajusta la redacción del artículo para aclarar y simplificar los casos en que procede la sentencia anticipada, especialmente cuando tiene lugar antes de la audiencia inicial.</p>
<p>auto, se pronunciará sobre las pruebas aportadas por las partes dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso. Cumplido lo anterior, correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 y la sentencia se proferirá por escrito.</p> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en esta causal, si el juzgador estima necesario adelantar la audiencia inicial para agotar las etapas contempladas en esta, procederá de la siguiente manera: se pronunciará por auto sobre las pruebas en la forma prevista en el inciso anterior; señalará fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual, luego de agotar las etapas correspondiente, dará traslado para alegar y proferirá la sentencia anticipada en forma oral.</p> <p>En el caso de que se evidencie la necesidad de practicar pruebas, las decretará, adelantará las etapas siguientes del proceso y proferirá sentencia al final de mismo.</p> <p><b>2.</b> En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa</p>	<p>sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;</p> <p><b>d)</b> Cuando las pruebas solicitadas <del>deban ser rechazadas por impertinentes, inconducentes o inútiles.</del> <u>por las partes sean</u> <del>deban ser rechazadas por impertinentes, inconducentes o inútiles.</del> <u>aportadas por las partes</u> dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso <u>y fijará el litigio u objeto de controversia.</u></p> <p>Cumplido lo anterior, <del>se</del> <u>se</u> correrá traslado para alegar <del>por escrito,</del> <u>por escrito,</u> en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 <del>de este código</del> <u>de este código</u> y la sentencia se proferirá por escrito.</p> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en esta causal <del>este numeral,</del> <u>este numeral,</u> si el juzgador <del>estima</del> <u>estima</u> <del>juez o magistrado</del> <u>juez o magistrado</u> <del>ponente</del> <u>ponente</u> <del>considera necesario adelantar</del> <u>considera necesario adelantar</u> <del>realizar</del> <u>realizar</u> la audiencia inicial <del>para agotar las etapas contempladas en esta,</del> <u>para agotar las etapas contempladas en esta,</u> <del>procederá de la siguiente manera: se pronunciará por auto sobre las pruebas en la forma prevista en el inciso</del> <u>procederá de la siguiente manera: se pronunciará por auto sobre las pruebas en la forma prevista en el inciso</u></p>		<p>propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.</p> <p>Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.</p> <p><b>3.</b> En cualquier estado del proceso, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la conciliación, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia manifiesta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito.</p> <p><b>4.</b> En caso de allanamiento o transacción de conformidad</p>	<p><del>anterior, señalará fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual, luego de agotar las etapas correspondiente, dará traslado para alegar y proferirá la sentencia anticipada en forma oral podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.</del></p> <p>En el caso de que se evidencie la necesidad de practicar pruebas, las decretará, adelantará las etapas siguientes del proceso y proferirá sentencia al final de mismo.</p> <p><b>2.</b> En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.</p> <p>Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la</p>	

<p>con el artículo 176 de este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En la providencia que corra traslado para alegar, el juzgador indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada.</p> <p>Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.</p> <p>Surtido el traslado mencionado proferirá sentencia oral o escrita, según lo considere.</p> <p>No obstante, escuchados los alegatos, el juzgador podrá reconsiderar su decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará con el trámite del proceso.</p>	<p>petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.</p> <p>3. En cualquier estado del proceso, cuando <b>el juzgador</b> encuentre probada la cosa juzgada, <b>la caducidad, la transacción, la conciliación, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia falta</b> manifiesta de legitimación en la causa <b>y la prescripción extintiva</b>. <b>La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito.</b></p> <p>4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En la providencia que corra traslado para alegar, <b>se</b> indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.</p> <p>Surtido el traslado mencionado <b>se</b> proferirá sentencia oral o escrita, según <b>se</b> considere.</p>	
<p><b>Artículo 43.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182B, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas.</b> En los procesos donde esté involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado, organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de debate.</p> <p>Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar expresamente si tienen algún conflicto de interés.</p> <p>A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al final de la intervención de los</p>	<p>No obstante, escuchados los alegatos, <del>el juzgador se</del> podrá reconsiderar <del>su la</del> decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará <del>con</del> el trámite del proceso.</p> <p><b>Artículo 43. Adiciónase Adiciónese</b> a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182B, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas.</b> En los procesos donde esté involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado, organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de debate.</p> <p>Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar expresamente si tienen algún conflicto de interés.</p> <p>A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al final de la intervención de los</p>	<p>Se hace ajuste de forma y de redacción para aclarar la norma.</p>
<p>convocados, cada una de las partes y el Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra por una vez, hasta por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los demás intervinientes en la audiencia. El juzgador puede prorrogar este plazo si lo considera necesario.</p> <p>En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los intervinientes en relación con las manifestaciones que realicen en la audiencia.</p> <p><b>Artículo 44.</b> Adicionanse dos parágrafos al artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> En los Tribunales Administrativos la sala, subsección o sección dictará la sentencia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el reparto de los asuntos de control inmediato de legalidad no se considerará la materia del acto administrativo.</p> <p><b>Artículo 45.</b> Adiciónese el artículo 185A de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 185 A. Trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente</p>	<p>convocados, cada una de las partes y el Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra por una vez, hasta por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los demás intervinientes en la audiencia. <del>El juzgador puede</del> <b>Se podrá</b> prorrogar este plazo si lo considera necesario.</p> <p>En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los intervinientes en relación con las manifestaciones que realicen en la audiencia.</p> <p><b>Artículo 44. Adicionanse Adiciónense</b> dos parágrafos al artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> En los Tribunales Administrativos la sala, subsección o sección dictará la sentencia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el reparto de los asuntos de control inmediato de legalidad no se considerará la materia del acto administrativo.</p> <p><b>Artículo 45.</b> Adiciónese el artículo 185A a la Ley 1437 de 2011, <b>el cual quedará</b> así:</p> <p><b>Artículo 185A. Trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hacen ajustes de redacción y forma.</p>
<p>administrativo, se surtirá lo siguiente:</p> <p>1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado fiscalmente responsable fiscal o tercero civilmente responsable, al órgano de control fiscal correspondiente.</p> <p>2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá decretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.</p> <p>3. Vencido el término de traslado o el periodo probatorio</p>	<p>administrativo, se surtirá lo siguiente:</p> <p>1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado <del>fiscalmente</del> <b>fiscalmente</b> responsable fiscal o tercero civilmente responsable, <b>y</b> al órgano de control fiscal correspondiente.</p> <p>2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá decretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.</p> <p>3. Vencido el término de traslado o el periodo probatorio</p>	

<p>cuando a ello hubiere lugar, el magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.</p> <p>4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrarse que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes.</p>	<p>cuando a ello hubiere lugar, el magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.</p> <p>4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrarse que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control automático <del>tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes</del> y se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes <u>y será susceptible de recurso de apelación que será decidido por salas especiales</u></p>	
<p>actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las</p>	<p>Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos</p>	
<p><del>conformadas por la corporación competente, en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta por una sala especial diferente a aquella que tomó la decisión. La sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará en la forma dispuesta en el presente numeral.</del></p> <p><b>Artículo 46.</b> Modifícase el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</b> Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.</p> <p>Las partes y sus apoderados deberán realizar sus</p>	<p><u>conformadas por la corporación competente, en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta por una sala especial diferente a aquella que tomó la decisión. La sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará en la forma dispuesta en el presente numeral.</u></p> <p><b>Artículo 46.</b> <del>Modifícase</del> <u>Modifíquese</u> el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</b> Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.</p> <p><b>Artículo 47.</b> Adiciónense el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:</p> <p>En todo caso, habrá lugar a la condena en costas a la parte vencida en el proceso cuando se establezca que se presentó la demanda o se profirió el acto demandado, según corresponda, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de aquella o de este, a pesar de la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial en sentido contrario al fundamento jurídico de una u otro.</p> <p><b>Artículo 48.</b> Modifícase el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 199.</b> Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a</p>	<p>electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.</p> <p><b>Artículo 47.</b> Adiciónense <u>Adiciónense</u> el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:</p> <p>En todo caso, <u>habrá lugar a la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el proceso</u> cuando se establezca que se presentó la demanda <del>o se profirió el acto demandado,</del> según <u>corresponda, cuando sea con</u> manifiesta la carencia de fundamento legal <del>de aquella o de este, a pesar de la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial en sentido contrario al fundamento jurídico de una u otro.</del></p> <p><b>Artículo 48.</b> Modifícase <u>Modifíquese</u> el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 199.</b> Notificación personal del auto admisorio y</p>	<p>Se hace ajuste de forma y se aclara la redacción para establecer que se condenará en costas a la parte vencida cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.</p> <p>Se hace ajuste de forma y redacción. Se incluye que la demanda y sus anexos deberá ser notificada al Ministerio Público.</p>

<p>entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares.</p> <p>El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.</p> <p>A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este.</p> <p>El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por</p> <p>del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares.</p> <p>El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.</p> <p>A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este.</p> <p>El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. <u>Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y sus anexos.</u> Se</p>	<p>otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia magnética del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p>presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia <u>magnética electrónica</u> del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el</p>												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="180 1458 402 1561"> <p><b>Artículo 49.</b> Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p> </td> <td data-bbox="402 1458 625 1561"> <p>proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p><b>Artículo 49. Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p> </td> <td data-bbox="625 1458 784 1561"> <p>Se hace ajuste de forma.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 1561 402 1818"> <p><b>Artículo 50.</b> Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p> </td> <td data-bbox="402 1561 625 1818"> <p><b>Artículo 50. Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p> </td> <td data-bbox="625 1561 784 1818"> <p>Se hace ajuste de forma.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 1818 402 2272"> <p><b>Artículo 51.</b> Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p> </td> <td data-bbox="402 1818 625 2272"> <p><b>Artículo 51. Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</b></p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p> </td> <td data-bbox="625 1818 784 2272"> <p>Se hace ajuste de forma.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Artículo 49.</b> Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p>	<p>proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p><b>Artículo 49. Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 50.</b> Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p>	<p><b>Artículo 50. Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 51.</b> Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p>	<p><b>Artículo 51. Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</b></p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="837 1458 1060 1741"> <p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p> </td> <td data-bbox="1060 1458 1282 1741"> <p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52. Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p> </td> <td data-bbox="1282 1458 1451 1741"> <p>Se hace ajuste de forma..</p> </td> </tr> </table>	<p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p>	<p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52. Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p>	<p>Se hace ajuste de forma..</p>
<p><b>Artículo 49.</b> Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p>	<p>proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p><b>Artículo 49. Modificase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>											
<p><b>Artículo 50.</b> Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p>	<p><b>Artículo 50. Modificase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>											
<p><b>Artículo 51.</b> Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p>	<p><b>Artículo 51. Adiciónase el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</b></p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>											
<p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p>	<p>fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52. Modificase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <p>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</p>	<p>Se hace ajuste de forma..</p>											

<p>2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.</p> <p>Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.</p>	<p>2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.</p> <p>Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.</p>		<p><b>Artículo 54.</b> Modifícase el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 54.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 53.</b> Modifícase el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.</p>	<p><b>Artículo 53.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 218. Prueba pericial.</b> La prueba pericial se registrará por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.</p> <p>El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p> <p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se registrará por las normas del Código General del Proceso.</p>	<p><b>Artículo 218. Prueba pericial.</b> La prueba pericial se registrará por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.</p> <p>El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p> <p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se registrará por las normas del Código General del Proceso.</p>	
<p>dictamen pericial decretado de oficio del Código General del Proceso.</p> <p>En la providencia que decrete la prueba el juez o magistrado ponente le señalará al perito el cuestionario que debe resolver, conforme con la petición del solicitante de la prueba.</p> <p>Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince (15) días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.</p> <p>El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la entidad pública para contratar asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. En este caso el apoderado de la entidad deberá manifestar, dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. El juzgador decidirá sobre la solicitud.</p> <p>Parágrafo. En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o</p>	<p>en esta ley, se regulará por las normas del dictamen pericial decretado de oficio del Código General del Proceso.</p> <p>En la providencia que decrete la prueba, el juez o magistrado ponente le señalará al perito el cuestionario que debe resolver, conforme con la petición del solicitante de la prueba.</p> <p>Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince (15) días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.</p> <p>El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la entidad pública para contratar asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. En este caso el apoderado de la entidad deberá manifestar, dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. El juzgador <del>decidirá</del> <b>juez o magistrado ponente</b> decidirá sobre la solicitud.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad</p>		<p>decretado de oficio, el juez podrá prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 del Código General del Proceso.</p>	<p>pública, sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, el juez <del>o magistrado ponente</del> <b>magistrado ponente</b> podrá prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 del Código General del Proceso.</p>	
			<p><b>Artículo 56.</b> Modifícase el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 56.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
			<p><b>Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado.</b> Al decretar el dictamen el juez o magistrado ponente designará el perito que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación o la manifestación de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p>	<p><b>Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado.</b> Al decretar el dictamen el juez o magistrado ponente designará el perito que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación o la manifestación de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p>	

<p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p>Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.</p>	<p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p>Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.</p>		<p>decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p>	<p>perito. Cuando el dictamen sea decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p>	
<p><b>Artículo 57.</b> Modificase el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 221. Honorarios del perito.</b> Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.</p> <p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea</p>	<p><b>Artículo 57.</b> Modifícase <b>Modifíquese</b> el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 221. Honorarios del perito.</b> Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.</p> <p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del</p>	<p>Se hace modificación de forma</p>	<p><b>Parágrafo.</b> De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p>	<p><b>Parágrafo.</b> De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.</b></p> <p>1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</p> <p>Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas.</p> <p>2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</p> <p><b>Artículo 59.</b> Modificase el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p><b>Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.</b></p> <p>1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</p> <p>Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas.</p> <p>2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</p> <p><b>Artículo 59.</b> Modifícase <b>Modifíquese</b> el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 60.</b> Modificase el inciso segundo del artículo 241 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden, en contra del representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días.</p>	<p><b>Artículo 60.</b> Modifícase <b>Modifíquese</b> el inciso segundo del artículo 241 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden; en contra del representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 59.</b> Modificase el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p><b>Artículo 59.</b> Modifícase <b>Modifíquese</b> el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 61.</b> Modificase el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 242. Reposición.</b> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.</p>	<p><b>Artículo 61.</b> Modifícase <b>Modifíquese</b> el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 242. Reposición.</b> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p><b>Artículo 62.</b> Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 243. Apelación.</b> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:</p>	<p><b>Artículo 62.</b> Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 243. Apelación.</b> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:</p>	<p>Se incluyen cuatro (4) párrafos al artículo, que aclaran el efecto y trámite del recurso de apelación y de la apelación adhesiva (artículo 62 de la ponencia).</p>

<p>1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p> <p>2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.</p> <p>3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.</p> <p>4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.</p> <p>5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.</p> <p>6. El que niegue la intervención de terceros.</p> <p>7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.</p> <p>8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.</p>	<p>1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p> <p>2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.</p> <p>3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.</p> <p>4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.</p> <p>5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.</p> <p>6. El que niegue la intervención de terceros.</p> <p>7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.</p> <p>8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.</p> <p><b>Parágrafo 1°. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el</b></p>			<p><b>efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.</b></p> <p><b>Parágrafo 2.° En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.</b></p> <p><b>Parágrafo 3°. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.</b></p> <p><b>La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.</b></p> <p><b>Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el</b></p>	
<p><b>Artículo 63.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 243A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios.</b> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:</p> <p>1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia.</p> <p>2. Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares.</p> <p>3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.</p> <p>4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.</p> <p>5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.</p> <p>6. Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedimentos y las recusaciones, salvo lo relativo a la imposición de multas, que son susceptibles de reposición.</p>	<p><b>trámite del medio de control de nulidad electoral.</b></p> <p><b>Artículo 63.</b> Adiciónase <b>Adiciónese</b> a la Ley 1437 de 2011 el artículo 243A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios.</b> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:</p> <p>1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia.</p> <p>2. Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares.</p> <p>3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.</p> <p>4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.</p> <p>5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.</p> <p>6. Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedimentos y las recusaciones, salvo lo relativo a la imposición de multas, que son susceptibles de reposición.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>7. Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artículo 233 de este código.</p> <p>8. Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un proceso para emitir providencia de unificación, en los términos del artículo 271 de este código.</p> <p>9. Las providencias que decreten pruebas de oficio.</p> <p>10. Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.</p> <p>11. Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.</p> <p>12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla.</p> <p>13. Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este carezca de sustentación.</p> <p>14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco procede recurso alguno contra las</p>	<p>7. Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artículo 233 de este código.</p> <p>8. Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un proceso para emitir providencia de unificación, en los términos del artículo 271 de este código.</p> <p>9. Las providencias que decreten pruebas de oficio.</p> <p>10. Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.</p> <p>11. Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.</p> <p>12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla.</p> <p>13. Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este carezca de sustentación.</p> <p>14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco procede recurso alguno contra las</p>	

<p>siguientes decisiones: las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia.</p> <p>15. Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.</p> <p>16. Las que resuelven la recusación del perito.</p> <p>17. Las demás que por expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, no sean susceptibles de recursos ordinarios.</p>	<p>siguientes decisiones: las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia.</p> <p>15. Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.</p> <p>16. Las que resuelven la recusación del perito.</p> <p>17. Las demás que por expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, no sean susceptibles de recursos ordinarios.</p>		<p>2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.</p> <p>3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.</p> <p>De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p>	<p>nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.</p> <p>2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.</p> <p>3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.</p> <p>De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p>	
<p><b>Artículo 64.</b> Modifícase el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.</b> La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:</p> <p>1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.</p>	<p><b>Artículo 64. Modifícase</b> <del>Modifícase</del> el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.</b> La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:</p> <p>1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>			
<p>Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.</p> <p>4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.</p>	<p>Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.</p> <p>4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.</p>		<p><b>Artículo 66.</b> Modifícase el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 246. Súplica.</b> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:</p> <p>1. Los siguientes autos dictados en el curso de cualquier instancia: Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción.</p> <p>2. Los enlistados en los numerales 1 a 7 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.</p> <p>3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.</p> <p>4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.</p> <p>Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.</p> <p>La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:</p>	<p><b>Artículo 66. Modifícase</b> <del>Modifícase</del> el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 246. Súplica.</b> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:</p> <p>1. Los <del>siguientes autos dictados en el curso de cualquier instancia:</del> <b>siguientes autos dictados en cualquier instancia.</b> Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción <b>en cualquier instancia.</b></p> <p>2. Los enlistados en los numerales 1 a <del>7</del> <b>8</b> del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.</p> <p>3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.</p> <p>4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.</p> <p>Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.</p> <p>La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su</p>	<p>Se hace ajuste de forma y redacción.</p>
<p><b>Artículo 65.</b> Modifícase el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 245. Queja.</b> Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.</p> <p>Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al establecido y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.</p> <p>Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.</p>	<p><b>Artículo 65.</b> Modifícase el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 245. Queja.</b> Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.</p> <p>Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al <del>establecido</del> <b>señalado en la ley</b> y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.</p> <p>Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.</p>	<p>Se hacen ajustes de redacción</p>			

<p>a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último recurso.</p> <p>b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.</p>	<p>interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:</p> <p>a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último recurso.</p> <p>b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.</p>	
<p>se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.</p> <p>2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.</p> <p>3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.</p> <p>4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la</p>	<p>proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.</p> <p>2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.</p> <p>3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.</p> <p>4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y</p>	
<p>El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel.</p> <p>e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle trámite.</p>	<p>El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel.</p> <p>e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle trámite.</p>	<p>Se hace ajuste de forma y redacción.</p>
<p><b>Artículo 67.</b> Modifícase el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias.</b> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia</p>	<p><b>Artículo 67. Modifícase el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias.</b> El recurso de apelación contra las sentencias</p>	
<p>admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.</p> <p>5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.</p> <p>6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.</p> <p>7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obediencia y cumplimiento.</p>	<p>hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.</p> <p>5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.</p> <p>6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.</p> <p>7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obediencia y cumplimiento.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p><b>Artículo 68.</b> Adiciónase un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p><b>Artículo 68.—Adiciónase Adiciónese</b> un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p>	

<p>Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.</p>	<p>Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.</p>		<p>Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.</p>	<p>otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.</p>	
<p><b>Artículo 69.</b> Modificase el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 69.</b>—<del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.</p>	<p>Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.</p>	
<p><b>Artículo 253. Trámite.</b> Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos.</p>	<p><b>Artículo 253. Trámite.</b> Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos.</p>		<p><b>Parágrafo.</b> En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia.</p>	<p><b>Parágrafo.</b> En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia.</p>	
<p>El recurso se rechazará cuando:</p>	<p>El recurso se rechazará cuando:</p>		<p><b>Artículo 70.</b> Modificase el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 70.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>1. No se presente en el término legal.</p> <p>2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.</p> <p>3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.</p>	<p>1. No se presente en el término legal.</p> <p>2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.</p> <p>3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.</p>		<p><b>Artículo 255. Sentencia.</b> Vencido el periodo probatorio se dictará sentencia.</p>	<p><b>Artículo 255. Sentencia.</b> Vencido el periodo probatorio se dictará sentencia.</p>	
<p>Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio</p>	<p>Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la</p>		<p>Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.</p>	<p>Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.</p>	
<p>El recurso se rechazará cuando:</p>	<p>El recurso se rechazará cuando:</p>		<p>En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha</p>	<p>En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y</p>	

invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.

demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

**Artículo 71.** Modificase el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo 71.** ~~Modifícase~~ **Modifíquese** el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Se hace ajuste de forma.

**Artículo 257. Procedencia.** El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.

**Artículo 257. Procedencia.** El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.

Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:

Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:

1. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertían actos administrativos de cualquier autoridad.

1. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertían actos administrativos de cualquier autoridad.

2. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.

2. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.

3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.

3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.

4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación

4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación

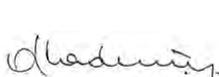
<p>directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.</p> <p>Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 72.</b> Modifícase el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 261. Interposición.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.</p> <p>Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según el caso.</p>	<p>directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.</p> <p>Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 72.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 261. Interposición.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.</p> <p>Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según el caso.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciera, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.</p> <p>El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso.</p> <p><b>Artículo 75.</b> Modifícase el artículo 267 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 267. Efectos de la sentencia.</b> Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es</p>	<p>Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciera, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.</p> <p>El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso.</p> <p><b>Artículo 75.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 267 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 267. Efectos de la sentencia.</b> Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.</p> <p><b>Artículo 73.</b> Modifícase el inciso segundo del artículo 264 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 74.</b> Modifícase el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 265. Admisión del recurso.</b> Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.</p>	<p>La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.</p> <p><b>Artículo 73.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el inciso segundo del artículo 264 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 74.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 265. Admisión del recurso.</b> Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>desestimado, se condenará en costas al recurrente.</p> <p>Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obediencia a lo resuelto en el recurso extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264.</p> <p>Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.</p> <p><b>Artículo 76.</b> Modifícase el artículo 268 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 268. Desistimiento.</b> El recurrente podrá desistir del recurso mientras no se haya dictado resolución judicial que</p>	<p>desestimado, se condenará en costas al recurrente.</p> <p>Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obediencia a lo resuelto en el recurso extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264.</p> <p>Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.</p> <p><b>Artículo 76.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 268 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 268. Desistimiento.</b> El recurrente podrá desistir del recurso mientras no se haya</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>

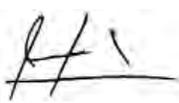
<p>ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desistimiento.</p> <p>El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.</p> <p>A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 316 del Código General del Proceso, en lo pertinente, incluida la condena en costas.</p> <p>Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial con autorización previa y escrita de su representante, debidamente acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código.</p> <p><b>Artículo 77.</b> Modifícase el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.</b> Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad</p>	<p>dictado resolución judicial que ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desistimiento.</p> <p>El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.</p> <p>A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 316 del Código General del Proceso, en lo pertinente, incluida la condena en costas.</p> <p>Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial con autorización previa y escrita de su representante, debidamente acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código.</p> <p><b>Artículo 77. Modifícase el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</b></p> <p><b>Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.</b> Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>	<p>hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</p> <p>Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.</p> <p>Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.</p> <p>La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:</p> <p>1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,</p>	<p>unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</p> <p>Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.</p> <p>Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.</p> <p>La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:</p> <p>1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo</p>	
<p>con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.</p> <p>2. Se haya presentado extemporáneamente.</p> <p>3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.</p> <p>4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.</p> <p>5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.</p> <p>6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.</p> <p>De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica</p>	<p>Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.</p> <p>2. Se haya presentado extemporáneamente.</p> <p>3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.</p> <p>4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.</p> <p>5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.</p> <p>6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.</p> <p>De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia</p>		<p>del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.</p> <p>Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.</p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.</p> <p>Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.</p>	<p>Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.</p> <p>Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.</p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.</p> <p>Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.</p>	

<p>Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.</p> <p>De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia.</p> <p>Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.</p> <p>Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con</p>	<p>Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.</p> <p>De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia.</p> <p>Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.</p> <p>Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con</p>		<p>anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.</p> <p>Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control precedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.</p> <p>Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código.</p>	<p>anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.</p> <p>Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control precedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.</p> <p>Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código.</p>	
<p><b>Artículo 78.</b> Modifícase el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial.</b> Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.</p> <p><b>Artículo 79.</b> Modifíquese el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</b> Por razones de importancia</p>	<p><b>Artículo 78.</b>—Modifícase <b>Modifíquese</b> el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial.</b> Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.</p> <p><b>Artículo 79.</b> Modifíquese el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</b> Por razones de importancia</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p> <p>Se hace ajuste de forma en el parágrafo.</p>	<p>jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.</p> <p>En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las</p>	<p>jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.</p> <p>En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las</p>	

<p>subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.</p> <p>La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</p>	<p>subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.</p> <p>La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</p>	
<p>por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.</p> <p><b>Artículo 80.</b> Modifícase el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 298. Procedimiento.</b> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.</p> <p>Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas</p>	<p>por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.</p> <p><b>Artículo 80.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 298. Procedimiento.</b> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.</p> <p>Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>
<p>La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.</p> <p>La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.</p> <p>Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos</p>	<p>La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.</p> <p>La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.</p> <p>Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos</p>	
<p>para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.</p> <p>Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 81.</b> Modifícase el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos.</b> Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las</p>	<p>consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.</p> <p>Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 81.</b> <del>Modifícase</del> <b>Modifíquese</b> el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos.</b> Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades</p>	<p>Se hace ajuste de forma.</p>

<p>reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en este código.</p> <p>En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.</p> <p>Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir</p>	<p>públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en este código.</p> <p>En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.</p> <p>Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir</p>		<p>adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 82.</b> Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así:</p> <p>4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:</p> <p>k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.</p> <p><b>Artículo 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento.</b> Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura, con la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes, conforme a sus competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los siguientes asuntos:</p> <p>1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.</p>	<p>adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 82.</b> Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así:</p> <p>4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:</p> <p>k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.</p> <p><b>Artículo 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento.</b> Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes, conforme a sus competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los siguientes asuntos:</p> <p>1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.</p>	<p>Sin modificaciones</p> <p>Ajuste de forma en el primer inciso.</p>
<p>2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y su distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales, de acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de la reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por cada despacho, tribunal o corporación de la jurisdicción, y (iii) la necesidad de cobertura en justicia local y rural.</p> <p>3. Definición y dotación de la infraestructura, recursos físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de los nuevos juzgados administrativos y despachos de magistrados que se requieran para la efectiva aplicación de esta ley.</p> <p>4. Planes de capacitación a los jueces, magistrados y demás servidores judiciales.</p> <p>5. Creación de una herramienta digital en la que se integren y sistematicen las sentencias de los tribunales administrativos para su consulta pública.</p> <p>En aquellos aspectos en los que se requiera, se escuchará el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en los términos que establezca la Ley</p>	<p>2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y su distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales, de acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de la reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por cada despacho, tribunal o corporación de la jurisdicción, y (iii) la necesidad de cobertura en justicia local y rural.</p> <p>3. Definición y dotación de la infraestructura, recursos físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de los nuevos juzgados administrativos y despachos de magistrados que se requieran para la efectiva aplicación de esta ley.</p> <p>4. Planes de capacitación a los jueces, magistrados y demás servidores judiciales.</p> <p>5. Creación de una herramienta digital en la que se integren y sistematicen las sentencias de los tribunales administrativos para su consulta pública.</p> <p>En aquellos aspectos en los que se requiera, se escuchará el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en los términos que establezca la Ley</p>		<p>Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019.</p> <p>La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello.</p> <p><b>Artículo 84. Comisión de acompañamiento y seguimiento.</b> Con el fin de realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las medidas relacionadas en el artículo anterior, se creará una comisión conformada por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura y dos por el Consejo de Estado, los cuales serán designados en el término de un mes contado desde la publicación de la presente ley.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura rendirá un informe mensual Sala Plena del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de las medidas.</p>	<p>Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019.</p> <p>La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello.</p> <p><b>Artículo 84. Comisión de acompañamiento y seguimiento.</b> Con el fin de realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las medidas relacionadas en el artículo anterior, se creará una comisión conformada por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura y dos por el Consejo de Estado, los cuales serán designados en el término de un mes contado desde la publicación de la presente ley.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura rendirá un informe mensual a la Sala Plena del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de las medidas.</p>	<p>Se aclara el contenido de la norma. Se aclara el trámite de las recomendaciones que haga la Comisión al Consejo Superior de la Judicatura.</p>

<p>Los conceptos y recomendaciones de la comisión sobre el cumplimiento o adopción de medidas deberán ser atendidos por el Consejo Superior de la Judicatura y, en caso de no ser adoptados, se manifestarán las razones, para lo cual se escuchará previamente al Presidente del Consejo de Estado.</p> <p>La comisión se reunirá cada 15 días y funcionará por tres años con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la implementación de la reforma.</p>	<p>Los conceptos y recomendaciones de la comisión sobre el cumplimiento o adopción de las medidas deberán ser atendidos por el Consejo Superior de la Judicatura y, <del>en caso de no ser adoptados, se manifestarán las razones, para lo cual se escuchará previamente al Presidente del Consejo de Estado. Previamente a que se tome la decisión de no adoptar tales conceptos y recomendaciones, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura expondrá las razones ante la Sala Plena del Consejo de Estado y se dejará constancia de los argumentos expuestos por cada uno de ellos.</del></p> <p>La comisión se reunirá cada <u>quince (15)</u> días y funcionará por tres <u>(3)</u> años con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la implementación de la reforma.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p><b>Artículo 85.</b> Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros.</b> En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del Proceso.</p>	<p><b>Artículo 85.</b> Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros.</b> En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del Proceso.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p>En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.</p>	<p>En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p><b>Artículo 87. Derogatoria.</b> Deróganse las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: el inciso 4º del artículo 192; la expresión «Dicho auto es susceptible del recurso de apelación» del artículo 193; el artículo 226; el inciso 2.º del artículo 232; la expresión «, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se decidirán de plano» del inciso 2º del artículo 238; el inciso 2.º del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; y se deroga la expresión «Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia» del inciso 2º del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2011; y el</p>	<p><b>Artículo 87. Derogatoria.</b> <del>Deróganse</del> <u>Deróguense</u> las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: <u>el artículo 148A</u>; el inciso 4º del artículo 192; la expresión «Dicho auto es susceptible del recurso de apelación» del artículo 193; el artículo 226; el inciso 2.º del artículo 232; la expresión «, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se decidirán de plano» del inciso 2º del artículo 238; el inciso 2.º del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; <u>y se deroga</u> la expresión «Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia» del inciso 2º del numeral 6.3 del artículo 6 de la</p>	<p>Se ajusta redacción y se deroga el artículo 148A.</p>
<p><b>Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa.</b> La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.</p>	<p><b>Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa.</b> La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p>Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.</p>	<p>Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p>De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.</p>	<p>De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p>artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.</p>	<p>Ley 1150 de 2011; y el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.</p>	<p>Sin modificación</p>
<p><b>XI. PROPOSICIÓN</b></p>		
<p>Con fundamento en lo expuesto, los suscritos Representantes a la Cámara rendimos INFORME DE PONENCIA POSITIVA y en consecuencia, solicitamos a los Honorables miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes DAR SEGUNDO DEBATE al Proyecto de Ley No. 364 del 2020 Cámara – No. 007 de 2019 Senado “<i>Por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción</i>” con el pliego de modificaciones aquí propuesto.</p>		
<p>De los Honorables Representantes,</p>		
 <p>ALEJANDRO VEGA PEREZ Coordinador Ponente</p>	 <p>CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO Coordinador Ponente</p>	<p>Sin modificación</p>
 <p>JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO Coordinador Ponente</p>	 <p>ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES Ponente</p>	<p>Sin modificación</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>JOSE GUSTAVO PADILLA OROZCO</b>                  Ponente             </div> <div style="text-align: center;">   <b>EDWARD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ</b>                  Ponente             </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>CARLOS GERMAN NAVAS TALERO</b>                  Ponente             </div> <div style="text-align: center;">   <b>ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GOMEZ</b>                  Ponente             </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>LUIS ALBERTO ALBAN URBANO</b>                  Ponente             </div>	<p style="text-align: center;"><b>TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AL PROYECTO DE LEY 364 DE 2020 CÁMARA –007 DE 2019 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN”</b></p> <p style="text-align: center;">El Congreso de Colombia,</p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETA:</b></p> <p><b>Artículo 1.</b> Modifíquense los numerales 1 y 9 y adiciónense los numerales 10 y 11 al artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades.</b> En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.</li> <li>Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.</li> <li>9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.</li> <li>10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.</li> <li>11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.</li> </ol> <p><b>Artículo 2.</b> Modifíquese el inciso 3° del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa.</b> Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente;</p>
<p>si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.</p> <p>De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.</p> <p>En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.</p> <p>Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.</p> <p><b>Artículo 3.</b> Modifíquese el parágrafo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se registrarán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 4.</b> Adiciónese el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.</p> <p>El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.</p>	<p>El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento.</p> <p>Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente comunicará la decisión al afectado, quien contará con tres (3) días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, quien contará con diez (10) días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta.</p> <p>Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido de la suspensión provisional.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción.</p> <p>No obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La facultad prevista en el presente artículo será ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 5.</b> Adiciónese un parágrafo al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para la práctica de pruebas no será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado será por cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 6.</b> Adiciónese un parágrafo al artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los alegatos.</p> <p>Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberán cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.</p>

<p><b>Artículo 7.</b> Adiciónese el artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado.</p> <p>El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar.</p> <p>El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.</p> <p>Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciera oportunamente, se rechazará.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno</p> <p><b>Artículo 8.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 53A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 53A. Uso de medios electrónicos.</b> Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento.</p> <p>El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos.</p> <p><b>Artículo 9.</b> Modifíquense los incisos primero y segundo del artículo 54 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos.</b> Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio.</p> <p>Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.</p> <p>El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el Régimen General de Protección de Datos Personales.</p> <p><b>Artículo 10.</b> Modifíquese el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 56. Notificación electrónica.</b> Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.</p> <p>Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.</p> <p>Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.</p> <p>Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.</p> <p>La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración.</p> <p><b>Artículo 11.</b> Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 59. Expediente electrónico.</b> El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.</p>
<p>Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión documental.</p> <p><b>Artículo 12. Modifíquese</b> el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 60. Sede electrónica.</b> Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno nacional.</p> <p>Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.</p> <p><b>Artículo 13.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 60A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 60A. Sede electrónica compartida.</b> La sede electrónica compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y actualización de la información y de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio.</p> <p><b>Artículo 14.</b> Modifíquese el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades.</b> Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos, además de:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.</li> <li>Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.</li> <li>Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado.</li> </ol> <p><b>Artículo 15.</b> Modifíquese el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general.</b> Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.</p> <p>Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.</p> <p>Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.</p> <p>En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.</p> <p><b>Parágrafo.</b> También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.</p> <p><b>Artículo 16.</b> Adiciónese el siguiente inciso al artículo 82 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>El Gobierno Nacional podrá crear mesas de trabajo con carácter temporal o permanente, con funcionarios de distintas entidades públicas, para apoyarlas y asesorarlas en la decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por las entidades del orden nacional de acuerdo con la reglamentación que para</p>

<p>el efecto se expida. Las entidades territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente inciso.</p> <p>El apoyo y asesoramiento de las mesas de trabajo no es vinculante para el funcionario que resuelve el recurso de apelación.</p> <p><b>Artículo 17.</b> Modifíquese el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.</b> Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.</p> <p>Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</li> <li>2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.</li> <li>3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.</li> </ol> <p>Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.</p> <p>La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.</p> <p>Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y la autoridad podrá negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará</li> </ol>	<p>obligada a enunciar cuales son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.</p> <p>2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.</p> <p>Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.</p> <p>La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.</p> <p><b>Artículo 18.</b> Modifíquese los numerales 3 y 4 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código.</li> <li>4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este código.</li> </ol> <p><b>Artículo 19.</b> Modifíquese el inciso primero y los numerales 7 y 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p><b>Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil.</b> La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a recurso alguno.</li> </ol> <p>Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.</p> <p>La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.</p> <p>En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La comunicación suspenderá el proceso judicial.</p> <p>El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma clara y completa, los hechos que dan origen a la controversia, y acompañarse de los documentos que se estimen pertinentes. Asimismo, deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de la discrepancia, en relación con los cuales se pida el concepto.</li> <li>b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades involucradas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes.</li> <li>c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el consejero ponente podrá decretar pruebas en los términos dispuestos en este código.</li> <li>d) Una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda la información necesaria, la Sala emitirá el concepto solicitado dentro de los noventa (90) días siguientes. No obstante, este plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más, de oficio o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no conocidos por la Sala en el trámite del concepto.</li> </ol> <p>10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un</p>	<p>solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.</p> <p><b>Artículo 20.</b> Modifíquese el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 125. De la expedición de providencias.</b> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.</li> <li>2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código.</li> <li>b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código;</li> <li>c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;</li> <li>d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código;</li> <li>e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia;</li> <li>f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala.</li> <li>g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas.</li> <li>h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.</li> </ol> </li> <li>3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.</li> </ol> <p><b>Artículo 21.</b> Modifíquese los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>

<p><b>Artículo 131. Trámite de los impedimentos.</b> Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando en un Magistrado concorra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.</p> <p>Sólo se ordenará sorteo de conjuéz, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo.</p> <p>5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuéces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 22. Modifíquese</b> los numerales 3 y 5 del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 132. Trámite de las recusaciones.</b> Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o secciones que indique el reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuéz, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación.</p>	<p>El expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuéces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 23.</b> Adiciónese el artículo 136A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 136A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías territoriales.</p> <p>Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaría del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo.</p> <p><b>Artículo 24.</b> Modifíquese el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.</b> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.</li> <li>2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden nacional.</li> <li>3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.</li> </ol>
<p>4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontrolador General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.</p> <p>5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.</p> <p>6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.</p> <p>7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido o nombrado haya sido postulado por esta última corporación.</p> <p><b>Artículo 25.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 149A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad.</b> El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la República, congresistas, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral.</li> </ol>	<p>En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el Vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción.</p> <p>En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p><b>Artículo 26.</b> Modifíquese el inciso primero del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.</b> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.</p> <p><b>Artículo 27.</b> Modifíquese el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.</li> <li>2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.</li> <li>3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.</li> </ol>

<p>4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.</p> <p>5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital de Bogotá.</p> <p>6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p> <p>a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;</p> <p>b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes de los distritos y de los municipios de menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial o equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.</p> <p>7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales. Esta competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.</p> <p>8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 28.</b> Modifíquese el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</li> </ol> <p>Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</li> </ol> <p>Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p>
<p>a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento.</p> <p>c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado.</p> <p>d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal.</p> <p>e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado.</p> <p>10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.</li> <li>12. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.</li> <li>13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.</li> <li>14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.</li> <li>15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.</li> <li>17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</li> <li>18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.</li> <li>19. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.</li> <li>20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.</li> <li>21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.</li> <li>22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las</li> </ol>

<p>personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A.</p> <p>24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios.</p> <p>25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación o registro.</p> <p>26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p><b>Artículo 29.</b> Modifíquese el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 154. Competencia de los juzgados administrativos en única instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en única instancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.</li> <li>2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</li> </ol> <p><b>Artículo 30.</b> Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos</li> </ol>	<p>administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía.</li> <li>3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.</li> <li>9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos.</li> </ol>
<p>Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.</li> <li>11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li> <li>12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.</li> <li>13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</li> <li>14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo de Estado.</li> <li>15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</li> <li>16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.</li> <li>17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.</li> </ol> <p><b>Artículo 31.</b> Modifíquese el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 156. Competencia por razón del territorio.</b> Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de certificación o registro, por el lugar donde se expidió el acto.</li> <li>2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</li> <li>3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</li> <li>4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales o en laudos arbitrales derivados de tales contratos, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.</li> <li>5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación del bien.</li> <li>6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada a elección de la parte actora.</li> <li>7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda; en los demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.</li> <li>8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.</li> <li>9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competencia se fijará por el lugar de la sede principal de la entidad demandada, en Colombia.</li> <li>10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante.</li> </ol>

<p>11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia en el domicilio del demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestarse el servicio.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado primero la demanda.</p> <p><b>Artículo 32.</b> Modifíquese el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.</b> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.</p> <p>La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella.</p> <p>Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.</p> <p>En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.</p> <p>En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.</p> <p><b>Artículo 33.</b> Modifíquese el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 158. Conflictos de competencia.</b> Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:</p>	<p>Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.</p> <p>Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.</p> <p>Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.</p> <p>La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.</p> <p><b>Artículo 34.</b> Modifíquese el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 161. Requisitos previos para demandar.</b> La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</li> </ol> <p>El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.</p> <p><b>Artículo 35.</b> Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>
<p>7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p> <p>8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.</p> <p>En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.</p> <p><b>Artículo 36.</b> Modifíquese el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 174. Retiro de la demanda.</b> El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.</p> <p>Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la demanda.</p> <p><b>Artículo 37.</b> Modifíquese el numeral 7 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p> <p><b>Artículo 38.</b> Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos</p>	<p>anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.</p> <p>Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.</p> <p>Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.</p> <p>Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.</p> <p><b>Artículo 39.</b> Modifíquese el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 179. Etapas.</b> El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.</li> <li>2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y</li> <li>3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.</li> </ol> <p>Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.</p> <p>También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutoria.</p>

<p><b>Artículo 40.</b> Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:</p> <p><b>6.</b> Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver.</p> <p><b>8.</b> Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.</p> <p>No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación</p> <p><b>9.</b> Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.</p> <p>En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Las audiencias relativas a procesos donde exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada.</p> <p><b>Artículo 41.</b> Modifíquese el numeral 2 del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>2.</b> Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p><b>Artículo 42.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:</p>	<p><b>Artículo 182A. Sentencia anticipada.</b> Se podrá dictar sentencia anticipada:</p> <p>1. Antes de la audiencia inicial:</p> <p>a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;</p> <p>b) Cuando no haya que practicar pruebas;</p> <p>c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;</p> <p>d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.</p> <p>El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.</p> <p>Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.</p> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.</p> <p>2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán alegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.</p> <p>Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.</p>
<p>3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.</p> <p>4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.</p> <p>Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.</p> <p>No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.</p> <p><b>Artículo 43.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182B, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas.</b> En los procesos donde esté involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado, organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de debate.</p> <p>Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar expresamente si tienen algún conflicto de interés.</p> <p>A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al final de la intervención de los convocados, cada una de las partes y el Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra por una vez, hasta por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los demás intervinientes en la audiencia. Se podrá prorrogar este plazo si lo considera necesario.</p> <p>En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los intervinientes en relación con las manifestaciones que realicen en la audiencia.</p> <p><b>Artículo 44.</b> Adiciónense dos párrafos al artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Parágrafo 1.</b> En los Tribunales Administrativos la sala, subsección o sección dictará la sentencia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el reparto de los asuntos de control inmediato de legalidad no se considerará la materia del acto administrativo.</p> <p><b>Artículo 45.</b> Adiciónese el artículo 185A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 185A. Trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente administrativo, se surtirá lo siguiente:</p> <p>1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable y al órgano de control fiscal correspondiente.</p> <p>2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá decretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.</p> <p>3. Vencido el término de traslado o el periodo probatorio cuando a ello hubiere lugar, el magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.</p> <p>4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrare que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control automático se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes y será susceptible de recurso de apelación que será decidido por salas especiales conformadas por la corporación competente, en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado la apelación será resuelta por una sala especial diferente a aquella que</p>

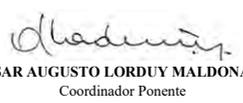
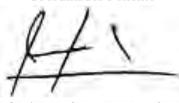
<p>tomó la decisión. La sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará en la forma dispuesta en el presente numeral.</p> <p><b>Artículo 46.</b> Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</b> Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.</p> <p>Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.</p> <p><b>Artículo 47.</b> Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:</p> <p>En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.</p>	<p><b>Artículo 48.</b> Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 199.</b> Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares.</p> <p>El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.</p> <p>A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este.</p> <p>El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexarse copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2º del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p><b>Artículo 49.</b> Modifíquese el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas</p>
<p>de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 50.</b> Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p> <p><b>Artículo 51.</b> Adiciónese el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</li> <li>2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.</li> </ol> <p>Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.</p>	<p>De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.</p> <p><b>Artículo 53.</b> Modifíquese el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.</p> <p><b>Artículo 54.</b> Modifíquese el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 218. Prueba pericial.</b> La prueba pericial se registrará por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.</p> <p>El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p> <p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se registrará por las normas del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 55.</b> Modifíquese el artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 219. Práctica y contradicción del dictamen pericial solicitado por las partes.</b> Cuando el dictamen pericial sea solicitado por las partes, su práctica y contradicción, en lo no previsto en esta ley, se regulará por las normas del dictamen pericial decretado de oficio del Código General del Proceso.</p> <p>En la providencia que decrete la prueba, el juez o magistrado ponente le señalará al perito el cuestionario que debe resolver, conforme con la petición del solicitante de la prueba.</p> <p>Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaria a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince (15) días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.</p> <p>El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la entidad pública para contratar asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. En este caso el apoderado</p>

<p>de la entidad deberá manifestar, dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. El juez o magistrado ponente decidirá sobre la solicitud.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, el juez o magistrado ponente podrá prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 56.</b> Modifíquese el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado.</b> Al decretar el dictamen el juez o magistrado ponente designará el perito que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación o la manifestación de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p> <p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p>Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.</p> <p><b>Artículo 57.</b> Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 221. Honorarios del perito.</b> Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.</p> <p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el</p>	<p>evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p> <p><b>Parágrafo.</b> De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p> <p><b>Artículo 58.</b> Modifíquese el artículo 222 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.</b></p> <p>1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</p> <p>Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas.</p> <p>2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</p> <p><b>Artículo 59.</b> Modifíquese el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p> <p><b>Artículo 60.</b> Modifíquese el inciso segundo del artículo 241 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió el orden en contra del representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días.</p>
<p><b>Artículo 61.</b> Modifíquese el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 242. Reposición.</b> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 62.</b> Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 243. Apelación.</b> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</li> <li>2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.</li> <li>3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.</li> <li>4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.</li> <li>5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.</li> <li>6. El que niegue la intervención de terceros.</li> <li>7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.</li> <li>8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1°.</b> El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.</p> <p><b>Parágrafo 3°.</b> La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras</p>	<p>el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.</p> <p>La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.</p> <p><b>Parágrafo 4°.</b> Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral.</p> <p><b>Artículo 63.</b> Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 243A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios.</b> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia.</li> <li>2. Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares.</li> <li>3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.</li> <li>4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.</li> <li>5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.</li> <li>6. Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedimentos y las recusaciones, salvo lo relativo a la imposición de multas, que son susceptibles de reposición.</li> <li>7. Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artículo 233 de este código.</li> <li>8. Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un proceso para emitir providencia de unificación, en los términos del artículo 271 de este código.</li> <li>9. Las providencias que decreten pruebas de oficio.</li> <li>10. Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.</li> <li>11. Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.</li> <li>12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos</li> </ol>

<p>precedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla.</p> <p>13. Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este carezca de sustentación.</p> <p>14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco procede recurso alguno contra las siguientes decisiones: las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia.</p> <p>15. Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.</p> <p>16. Las que resuelven la recusación del perito.</p> <p>17. Las demás que por expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, no sean susceptibles de recursos ordinarios.</p> <p><b>Artículo 64.</b> Modifíquese el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.</b> La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.</li> <li>2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.</li> <li>3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.</li> </ol> <p>De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p>	<p>Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.</p> <p>4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.</p> <p><b>Artículo 65.</b> Modifíquese el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 245. Queja.</b> Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.</p> <p>Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.</p> <p>Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 66.</b> Modifíquese el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 246. Súplica.</b> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.</li> <li>2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.</li> <li>3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.</li> <li>4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.</li> </ol> <p>Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.</p> <p>La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último recurso.</li> <li>b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</li> <li>c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.</li> </ol> <p>El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel.</li> <li>e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle trámite.</li> </ol> <p><b>Artículo 67.</b> Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias.</b> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.</li> <li>3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.</li> <li>4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.</li> <li>5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.</li> <li>6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.</li> <li>7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obediencia y cumplimiento.</li> </ol> <p><b>Artículo 68.</b> Adiciónese un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p> <p>Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.</p> <p><b>Artículo 69.</b> Modifíquese el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 253. Trámite.</b> Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos.</p>

<p>El recurso se rechazará cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se presente en el término legal.</li> <li>2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.</li> <li>3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.</li> </ol> <p>Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.</p> <p>Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 70.</b> Modifíquese el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 255. Sentencia.</b> Vencido el periodo probatorio se dictará sentencia.</p> <p>Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.</p> <p>En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.</p> <p>Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.</p> <p>Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.</p>	<p><b>Artículo 71.</b> Modifíquese el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 257. Procedencia.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.</li> <li>2. Dosecientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.</li> <li>3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.</li> <li>4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.</p> <p>Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 72.</b> Modifíquese el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 261. Interposición.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.</p>
<p>Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según el caso.</p> <p>La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.</p> <p><b>Artículo 73.</b> Modifíquese el inciso segundo del artículo 264 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 74.</b> Modifíquese el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 265. Admisión del recurso.</b> Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.</p> <p>Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.</p> <p>El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso.</p> <p><b>Artículo 75.</b> Modifíquese el artículo 267 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 267. Efectos de la sentencia.</b> Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.</p>	<p>Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obediencia a lo resuelto en el recurso extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264.</p> <p>Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.</p> <p><b>Artículo 76.</b> Modifíquese el artículo 268 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 268. Desistimiento.</b> El recurrente podrá desistir del recurso mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desistimiento.</p> <p>El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.</p> <p>A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 316 del Código General del Proceso, en lo pertinente, incluida la condena en costas.</p> <p>Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial con autorización previa y escrita de su representante, debidamente acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código.</p> <p><b>Artículo 77.</b> Modifíquese el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.</b> Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</p> <p>Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola</p>

<p>presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.</p> <p>Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.</p> <p>La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.</li> <li>2. Se haya presentado extemporáneamente.</li> <li>3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.</li> <li>4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.</li> <li>5. Haya operado la caducidad del medio de control precedente o la prescripción total del derecho reclamado.</li> <li>6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.</li> </ol> <p>De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.</p> <p>Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.</p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.</p>	<p>Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.</p> <p>Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.</p> <p>De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia.</p> <p>Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.</p> <p>Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.</p> <p>Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control precedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanuda el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.</p> <p>Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.</p>
<p><b>Parágrafo 2.</b> En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código.</p> <p><b>Artículo 78.</b> Modifíquese el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial.</b> Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.</p> <p><b>Artículo 79.</b> Modifíquese el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</b> Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.</p> <p>En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia</p>	<p>Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.</p> <p>La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</p> <p>La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.</p> <p>La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.</p> <p>Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.</p> <p><b>Artículo 80.</b> Modifíquese el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 298. Procedimiento.</b> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librára mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.</p> <p>Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librára, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las</p>

<p>reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.</p> <p>Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 81.</b> Modifíquese el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos.</b> Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en este código.</p> <p>En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.</p> <p>Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 82.</b> Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así:</p> <p>4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:</p>	<p>k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.</p> <p><b>Artículo 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento.</b> Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes, conforme a sus competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.</li> <li>2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y su distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales, de acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de la reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por cada despacho, tribunal o corporación de la jurisdicción, y (iii) la necesidad de cobertura en justicia local y rural.</li> <li>3. Definición y dotación de la infraestructura, recursos físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de los nuevos juzgados administrativos y despachos de magistrados que se requieran para la efectiva aplicación de esta ley.</li> <li>4. Planes de capacitación a los jueces, magistrados y demás servidores judiciales.</li> <li>5. Creación de una herramienta digital en la que se integren y sistematicen las sentencias de los tribunales administrativos para su consulta pública.</li> </ol> <p>En aquellos aspectos en los que se requiera, se escuchará el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en los términos que establezca la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019.</p> <p>La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello.</p> <p><b>Artículo 84. Comisión de acompañamiento y seguimiento.</b> Con el fin de realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las medidas relacionadas en el artículo anterior, se creará una comisión conformada por dos delegados del Consejo</p>
<p>Superior de la Judicatura y dos por el Consejo de Estado, los cuales serán designados en el término de un mes contado desde la publicación de la presente ley.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura rendirá un informe mensual a la Sala Plena del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de las medidas.</p> <p>Los conceptos y recomendaciones de la comisión sobre el cumplimiento o adopción de las medidas deberán ser atendidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Previamente a que se tome la decisión de no adoptar tales conceptos y recomendaciones, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura expondrá las razones ante la Sala Plena del Consejo de Estado y se dejará constancia de los argumentos expuestos por cada uno de ellos.</p> <p>La comisión se reunirá cada quince (15) días y funcionará por tres (3) años con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la implementación de la reforma.</p> <p><b>Artículo 85.</b> Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros.</b> En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa.</b> La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.</p> <p>Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.</p> <p>De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se</p>	<p>iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.</p> <p><b>Artículo 87. Derogatoria.</b> Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: el artículo 148A; el inciso 4º del artículo 192; la expresión «Dicho auto es susceptible del recurso de apelación» del artículo 193; el artículo 226; el inciso 2.º del artículo 232; la expresión «, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se decidirán de plano» del inciso 2º del artículo 238; el inciso 2.º del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; la expresión «Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia» del inciso 2º del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2011; y el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.</p> <p>De los honorables Representantes,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>ALEJANDRO VEGA PEREZ</b> Coordinador Ponente</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO</b> Coordinador Ponente</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO</b> Coordinador Ponente</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES</b> Ponente</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>JOSÉ GUSTAVO PADILLA OROZCO</b> Ponente</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>EDWARD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ</b> Ponente</p> </div> </div>

 <p><b>CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO</b> Ponente</p>  <p><b>ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ</b> Ponente</p>  <p><b>LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO</b> Ponente</p>	<p style="text-align: center;"><b>TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA COMISION PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AL PROYECTO DE LEY 364 DE 2020 CÁMARA -007 DE 2019 SENADO "POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN"</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EL CONGRESO DE COLOMBIA,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETA:</b></p> <p><b>Artículo 1.</b> Modifícase los numerales 1 y 9 y adiciónense los numerales 10 y 11 al artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades.</b> En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.</li> <li>9. Relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.</li> <li>10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.</li> <li>11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.</li> </ol> <p><b>Artículo 2.</b> Modifícase el inciso 3° del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa.</b> Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.</p>
<p>De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.</p> <p>En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.</p> <p>Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.</p> <p><b>Artículo 3.</b> Modifícase el parágrafo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónase un parágrafo al mismo artículo, así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 4.</b> Adiciónase el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.</p> <p>El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.</p> <p>El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento.</p> <p>Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente comunicará la decisión al afectado, quien contará con tres (3) días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, quien contará con diez (10) días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta.</p> <p>Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido de la suspensión provisional.</p>	<p><b>Parágrafo 1.</b> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción.</p> <p>No obstante, la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La facultad prevista en el presente artículo será ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 5.</b> Adiciónase un parágrafo al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para la práctica de pruebas no será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado será por cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 6.</b> Adiciónase un parágrafo al artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los alegatos.</p> <p>Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberán cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.</p> <p><b>Artículo 7.</b> Adiciónese el artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.</b> Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado.</p> <p>El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar.</p> <p>El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.</p> <p>Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciera oportunamente, se rechazará.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno</p>

<p><b>Artículo 8.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 53A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 53A. Uso de medios electrónicos.</b> Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento.</p> <p>El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos.</p> <p><b>Artículo 9.</b> Modifícanse los incisos primero y segundo del artículo 54 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos.</b> Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio.</p> <p>Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.</p> <p>El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el Régimen General de Protección de Datos Personales.</p> <p><b>Artículo 10.</b> Modifícase el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 56. Notificación electrónica.</b> Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.</p> <p>Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.</p> <p>Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.</p> <p>Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.</p> <p>La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración.</p>	<p><b>Artículo 11.</b> Modifícase el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 59. Expediente electrónico.</b> El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.</p> <p>Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión documental.</p> <p><b>Artículo 12.</b> Modifícase el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 60. Sede electrónica.</b> Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno nacional.</p> <p>Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.</p> <p><b>Artículo 13.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 60A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 60A. Sede electrónica compartida.</b> La sede electrónica compartida será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y actualización de la información y de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio.</p> <p><b>Artículo 14.</b> Modifícase el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades.</b> Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos, además de:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.</li> <li>Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.</li> <li>Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado.</li> </ol> <p><b>Artículo 15.</b> Modifícase el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general.</b> Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.</p> <p>Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.</p> <p>Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.</p> <p>Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.</p> <p>En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.</p> <p><b>Parágrafo.</b> También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.</p> <p><b>Artículo 16.</b> Adiciónese el siguiente inciso al artículo 82 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>El Gobierno Nacional podrá crear grupos de trabajo por cada sector administrativo, con carácter temporal o permanente, para revisar y aprobar o improbar los proyectos de decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por las entidades adscritas y vinculadas para los casos en los que en la respectiva reglamentación se estime procedente la aplicación de este mecanismo. Las entidades territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente inciso</p> <p><b>Artículo 17.</b> Modifíquese el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, así:</p>	<p><b>Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.</b> Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.</p> <p>Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</li> <li>Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.</li> <li>La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.</li> </ol> <p>Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.</p> <p>La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.</p> <p>Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuales son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.</li> <li>Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.</li> </ol> <p>Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.</p>

<p>La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.</p> <p><b>Artículo 18.</b> Modificanse los numerales 3 y 4 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p>3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código.</p> <p>4. Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este código.</p> <p><b>Artículo 19.</b> Modificanse el inciso primero y los numerales 7 y 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, los cuales quedarán así:</p> <p><b>Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil.</b> La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados.</p> <p>7. Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a recurso alguno.</p> <p>Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.</p> <p>La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.</p> <p>En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La comunicación suspenderá el proceso judicial.</p> <p>El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:</p> <p>a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma clara y completa, los hechos que dan origen a la controversia, y acompañarse de los documentos que se estimen pertinentes. Asimismo,</p>	<p>deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de la discrepancia, en relación con los cuales se pida el concepto.</p> <p>b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades involucradas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes.</p> <p>c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el consejero ponente podrá decretar pruebas en los términos dispuestos en este código.</p> <p>d) Una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda la información necesaria, la Sala emitirá el concepto solicitado dentro de los noventa (90) días siguientes. No obstante, este plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más, de oficio o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no conocidos por la Sala en el trámite del concepto.</p> <p>10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.</p> <p><b>Artículo 20.</b> Modificase el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 125. De la expedición de providencias.</b> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:</p> <p>1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.</p> <p>2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:</p> <p>a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código.</p> <p>b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código;</p> <p>c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;</p> <p>d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código;</p> <p>e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia;</p>
<p>f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares, serán de sala.</p> <p>g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas.</p> <p>h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.</p> <p>i) Las que deciden el recurso de apelación contra las excepciones previas. En primera instancia esta decisión será de ponente. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y el Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.</p> <p>3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.</p> <p><b>Artículo 21.</b> Modificase los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 131. Trámite de los impedimentos.</b> Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.</p> <p>Sólo se ordenará sorteo de conjuer, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo.</p> <p>5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuer, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p>	<p><b>Artículo 22.</b> Modificase los numerales 3 y 5 del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 132. Trámite de las recusaciones.</b> Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:</p> <p>3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o secciones que indique el reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuer, cuando lo anterior no fuere suficiente.</p> <p>5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjuer, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.</p> <p><b>Artículo 23.</b> Adiciónese el artículo 136A de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 136 A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las contralorías territoriales.</p> <p>Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaría del respectivo despacho judicial para su reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo.</p> <p><b>Artículo 24.</b> Modificase el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.</b> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.</p>

<p>2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular del orden nacional.</p> <p>3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.</p> <p>4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicéfiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.</p> <p>5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.</p> <p>6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.</p> <p>7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido o nombrado haya sido postulado por esta última corporación.</p> <p><b>Artículo 25.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 149A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad.</b> El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la República, congresistas, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de</p>	<p>la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral.</p> <p>En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el Vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción.</p> <p>En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia.</p> <p><b>Artículo 26.</b> Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.</b> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.</p> <p><b>Artículo 27.</b> Modifícase el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:</p> <p>1. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.</p> <p>2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.</p> <p>3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.</p> <p>4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.</p>
<p>5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital de Bogotá.</p> <p>6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p> <p>a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;</p> <p>b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes de los distritos y de los municipios de menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial o equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.</p> <p>7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales. Esta competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.</p> <p>8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 28.</b> Modifícase el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.</b> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p>	<p>Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p>Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:</p> <p>a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento.</p>

<p>c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado.</p> <p>d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal.</p> <p>e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes.</p> <p>El número de habitantes se acreditará con la última información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</p> <p>8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado.</p> <p>10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.</p> <p>12. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.</p> <p>13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.</p> <p>14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.</p> <p>15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	<p>16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.</p> <p>17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>19. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.</p> <p>20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.</p> <p>21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.</p> <p>22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A.</p> <p>24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios.</p> <p>25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación o registro.</p> <p>26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p><b>Artículo 29.</b> Modifícase el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 154. Competencia de los juzgados administrativos en única instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en única instancia:</p>
<p>1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.</p> <p>2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p><b>Artículo 30.</b> Modifícase el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia.</b> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía.</p> <p>3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	<p>8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.</p> <p>9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos. Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.</p> <p>11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.</p> <p>13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo de Estado.</p> <p>15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p>17. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.</p> <p><b>Artículo 31.</b> Modifícase el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 156. Competencia por razón del territorio.</b> Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:</p>

<p>1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de certificación o registro, por el lugar donde se expidió el acto.</p> <p>2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.</p> <p>4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales o en laudos arbitrales derivados de tales contratos, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.</p> <p>5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación del bien.</p> <p>6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada a elección de la parte actora.</p> <p>7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda; en los demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.</p> <p>8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.</p> <p>9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competencia se fijará por el lugar de la sede principal de la entidad demandada, en Colombia.</p> <p>10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante.</p> <p>11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia en el domicilio del demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestarse el servicio.</p>	<p><b>Parágrafo.</b> Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado primero la demanda.</p> <p><b>Artículo 32.</b> Modifícase el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.</b> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.</p> <p>La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, sin incluir los que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.</p> <p>Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.</p> <p>En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.</p> <p>En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.</p> <p><b>Artículo 33.</b> Modifícase el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 158. Conflictos de competencia.</b> Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:</p> <p>Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.</p> <p>Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.</p>
<p>Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.</p> <p>La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.</p> <p><b>Artículo 34.</b> Modifíquese el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 161. Requisitos previos para demandar.</b> La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.</p> <p>El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.</p> <p>Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.</p> <p><b>Artículo 35.</b> Modifícase el numeral 7 y adiciónase un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p> <p>8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.</p> <p>En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.</p> <p><b>Artículo 36.</b> Modifícase el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 174. Retiro de la demanda.</b> El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.</p>	<p>Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la demanda.</p> <p><b>Artículo 37.</b> Modifícase el numeral 7 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.</p> <p><b>Artículo 38.</b> Modifícase el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.</p> <p>Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.</p> <p>Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, el juzgador declarará la terminación del proceso cuando advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.</p> <p>Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.</p> <p><b>Artículo 39.</b> Modifícase el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 179. Etapas.</b> El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.</li> <li>2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y</li> <li>3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.</li> </ol>

<p>Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.</p> <p>También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutive.</p> <p><b>Artículo 40.</b> Modifícanse los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:</p> <p><b>6.</b> Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver.</p> <p><b>8.</b> Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.</p> <p>No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación</p> <p><b>9.</b> Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.</p> <p>En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Las audiencias relativas a procesos donde exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada.</p> <p><b>Artículo 41.</b> Modifícase el numeral 2 del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>2.</b> Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p><b>Artículo 42.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182A. Sentencia anticipada.</b> El juzgador deberá dictar sentencia anticipada:</p> <p>1. Antes de la audiencia inicial: cuando se trate de asuntos de puro derecho; cuando no haya que practicar pruebas; cuando solo se haya pedido tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; o cuando las pruebas solicitadas deban ser rechazadas por impertinentes, inconducentes o inútiles. En este caso el juzgador, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas aportadas por las partes dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso. Cumplido lo anterior, correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 y la sentencia se proferirá por escrito.</p> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en esta causal, si el juzgador estima necesario adelantar la audiencia inicial para agotar las etapas contempladas en esta, procederá de la siguiente manera: se pronunciará por auto sobre las pruebas en la forma prevista en el inciso anterior; señalará fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual, luego de agotar las etapas correspondiente, dará traslado para alegar y proferirá la sentencia anticipada en forma oral.</p> <p>En el caso de que se evidencie la necesidad de practicar pruebas, las decretará, adelantará las etapas siguientes del proceso y proferirá sentencia al final de mismo.</p> <p>2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán alegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.</p> <p>Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.</p> <p>3. En cualquier estado del proceso, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la conciliación, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia manifiesta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito.</p>
<p>4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En la providencia que corra traslado para alegar, el juzgador indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada.</p> <p>Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.</p> <p>Surtido el traslado mencionado proferirá sentencia oral o escrita, según lo considere.</p> <p>No obstante, escuchados los alegatos, el juzgador podrá reconsiderar su decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará con el trámite del proceso.</p> <p><b>Artículo 43.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182B, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas.</b> En los procesos donde esté involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado, organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de debate.</p> <p>Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar expresamente si tienen algún conflicto de interés.</p> <p>A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al final de la intervención de los convocados, cada una de las partes y el Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra por una vez, hasta por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los demás intervinientes en la audiencia. El juzgador puede prorrogar este plazo si lo considera necesario.</p> <p>En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los intervinientes en relación con las manifestaciones que realicen en la audiencia.</p> <p><b>Artículo 44.</b> Adiciónanse dos párrafos al artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> En los Tribunales Administrativos la sala, subsección o sección dictará la sentencia.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el reparto de los asuntos de control inmediato de legalidad no se considerará la materia del acto administrativo.</p> <p><b>Artículo 45.</b> Adiciónese el artículo 185A de la Ley 1437 de 2011, así:</p>	<p><b>Artículo 185 A. Trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal.</b> Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente administrativo, se surtirá lo siguiente:</p> <p>1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado fiscalmente responsable fiscal o tercero civilmente responsable, al órgano de control fiscal correspondiente.</p> <p>2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá decretar las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.</p> <p>3. Vencido el término de traslado o el periodo probatorio cuando a ello hubiere lugar, el magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.</p> <p>4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrare que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes y se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes.</p> <p><b>Artículo 46.</b> Modifícase el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</b> Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtir en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.</p>

<p>Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.</p> <p><b>Artículo 47.</b> Adiciónense el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:</p> <p>En todo caso, habrá lugar a la condena en costas a la parte vencida en el proceso cuando se establezca que se presentó la demanda o se profirió el acto demandado, según corresponda, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de aquella o de este, a pesar de la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial en sentido contrario al fundamento jurídico de una u otro.</p> <p><b>Artículo 48.</b> Modifícase el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 199.</b> Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares.</p> <p>El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.</p> <p>A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este.</p>	<p>El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia magnética del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p><b>Artículo 49.</b> Modifícase el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital.</b> Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 50.</b> Modifícase el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.</p> <p><b>Artículo 51.</b> Adiciónense el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Artículo 201A. Traslados.</b> Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.</p> <p>De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Modifícase el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>
<p><b>Artículo 205. Notificación por medios electrónicos.</b> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.</li> <li>2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.</li> </ol> <p>Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.</p> <p><b>Artículo 53.</b> Modifícase el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.</p> <p><b>Artículo 54.</b> Modifícase el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 218. Prueba pericial.</b> La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.</p> <p>El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p> <p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 55.</b> Modifícase el artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 219. Contradicción del dictamen pericial solicitado por las partes.</b> Cuando el dictamen pericial sea solicitado por las partes, su práctica y contradicción, en lo no previsto en esta ley, se regulará por las normas del dictamen pericial decretado de oficio del Código General del Proceso.</p>	<p>En la providencia que decreta la prueba el juez o magistrado ponente le señalará al perito el cuestionario que debe resolver, conforme con la petición del solicitante de la prueba.</p> <p>Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince (15) días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.</p> <p>El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la entidad pública para contratar asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. En este caso el apoderado de la entidad deberá manifestar, dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. El juzgador decidirá sobre la solicitud.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, el juez podrá prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 56.</b> Modifícase el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado.</b> Al decretar el dictamen el juez o magistrado ponente designará el perito que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación o la manifestación de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señala. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p> <p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p>Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.</p> <p><b>Artículo 57.</b> Modifícase el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 221. Honorarios del perito.</b> Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.</p>

<p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p> <p><b>Parágrafo.</b> De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p> <p><b>Artículo 58.</b> Modifícase el artículo 222 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</li> </ol> <p>Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</li> </ol> <p><b>Artículo 59.</b> Modifícase el artículo 236 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 236. Término para resolver los recursos.</b> Los recursos procedentes contra el auto que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.</p> <p><b>Artículo 60.</b> Modifícase el inciso segundo del artículo 241 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden, en contra del representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días.</p> <p><b>Artículo 61.</b> Modifícase el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 242. Reposición.</b> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 62.</b> Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 243. Apelación.</b> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</li> <li>2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.</li> <li>3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.</li> <li>4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.</li> <li>5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.</li> <li>6. El que niegue la intervención de terceros.</li> <li>7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.</li> <li>8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.</li> </ol> <p><b>Artículo 63.</b> Adiciónase a la Ley 1437 de 2011 el artículo 243A, el cual será del siguiente tenor:</p> <p><b>Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios.</b> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia.</li> <li>2. Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares.</li> <li>3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.</li> <li>4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.</li> <li>5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedimentos y las recusaciones, salvo lo relativo a la imposición de multas, que son susceptibles de reposición.</li> <li>7. Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artículo 233 de este código.</li> <li>8. Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un proceso para emitir providencia de unificación, en los términos del artículo 271 de este código.</li> <li>9. Las providencias que decreten pruebas de oficio.</li> <li>10. Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.</li> <li>11. Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.</li> <li>12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla.</li> <li>13. Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este carezca de sustentación.</li> <li>14. En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco procede recurso alguno contra las siguientes decisiones: las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia.</li> <li>15. Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.</li> <li>16. Las que resuelven la recusación del perito.</li> <li>17. Las demás que por expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, no sean susceptibles de recursos ordinarios.</li> </ol> <p><b>Artículo 64.</b> Modifícase el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.</b> La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.</li> <li>2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos</li> </ol>	<p>procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.</li> </ol> <p>De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.</p> <p>Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.</li> </ol> <p><b>Artículo 65.</b> Modifíquese el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 245. Queja.</b> Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.</p> <p>Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al establecido y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.</p> <p>Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 66.</b> Modifícase el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 246. Súplica.</b> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los siguientes autos dictados en el curso de cualquier instancia: Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción.</li> <li>2. Los enlistados en los numerales 1 a 7 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.</li> <li>3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.</li> </ol>

<p>4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.</p> <p>Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.</p> <p>La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:</p> <p>a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último recurso.</p> <p>b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.</p> <p>El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse.</p> <p>d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel.</p> <p>e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle trámite.</p> <p><b>Artículo 67.</b> Modifícase el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias.</b> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.</li> <li>2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de</li> </ol>	<p>conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.</li> <li>4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.</li> <li>5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.</li> <li>6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.</li> <li>7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obediencia y cumplimiento.</li> </ol> <p><b>Artículo 68.</b> Adiciónase un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:</p> <p>Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.</p> <p><b>Artículo 69.</b> Modifícase el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 253. Trámite.</b> Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos.</p> <p>El recurso se rechazará cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se presente en el término legal.</li> <li>2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.</li> <li>3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.</li> </ol>
<p>Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.</p> <p>Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.</p> <p>Parágrafo. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 70.</b> Modifícase el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 255. Sentencia.</b> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.</p> <p>Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.</p> <p>En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.</p> <p>Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.</p> <p>Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.</p> <p><b>Artículo 71.</b> Modifícase el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 257. Procedencia.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.</li> <li>3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.</li> <li>4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.</p> <p>Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 72.</b> Modifícase el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 261. Interposición.</b> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.</p> <p>Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según el caso.</p> <p>La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.</p> <p><b>Artículo 73.</b> Modifícase el inciso segundo del artículo 264 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 74.</b> Modifícase el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>

<p><b>Artículo 265. Admisión del recurso.</b> Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.</p> <p>Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciera, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.</p> <p>El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso.</p> <p><b>Artículo 75.</b> Modifícase el artículo 267 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 267. Efectos de la sentencia.</b> Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.</p> <p>Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obediencia a lo resuelto en el recurso extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264.</p> <p>Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.</p> <p><b>Artículo 76.</b> Modifícase el artículo 268 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 268. Desistimiento.</b> El recurrente podrá desistir del recurso mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desistimiento.</p> <p>El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.</p> <p>A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 316 del Código General del Proceso, en lo pertinente, incluida la condena en costas.</p>	<p>Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial con autorización previa y escrita de su representante, debidamente acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código.</p> <p><b>Artículo 77.</b> Modifícase el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.</b> Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.</p> <p>Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.</p> <p>Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.</p> <p>La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.</li> <li>2. Se haya presentado extemporáneamente.</li> <li>3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.</li> <li>4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.</li> <li>5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.</li> <li>6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.</li> </ol> <p>De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.</p>
<p>Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.</p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.</p> <p>Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.</p> <p>Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.</p> <p>De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia.</p> <p>Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.</p> <p>Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.</p> <p>Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanuda el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.</p> <p>Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.</p>	<p><b>Parágrafo 2.</b> En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código.</p> <p><b>Artículo 78.</b> Modifícase el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial.</b> Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.</p> <p><b>Artículo 79.</b> Modifíquese el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</b> Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.</p> <p>En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.</p>

<p>La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.</p> <p>La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.</p> <p>La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrante y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.</p> <p>Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.</p> <p><b>Artículo 80.</b> Modifícase el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 298. Procedimiento.</b> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librándole mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.</p> <p>Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librándole, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.</p> <p>Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p>	<p><b>Artículo 81.</b> Modifícase el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos.</b> Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en este código.</p> <p>En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librándole mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.</p> <p>Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.</p> <p><b>Artículo 82.</b> Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así:</p> <p>4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:</p> <p>k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.</p> <p><b>Artículo 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento.</b> Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura, con la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes, conforme a sus competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los siguientes asuntos:</p> <p>1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.</p> <p>2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y su distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales, de acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de la reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por cada despacho, tribunal o corporación de la jurisdicción, y (iii) la necesidad de cobertura en justicia local y rural.</p>
<p>3. Definición y dotación de la infraestructura, recursos físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de los nuevos juzgados administrativos y despachos de magistrados que se requieran para la efectiva aplicación de esta ley.</p> <p>4. Planes de capacitación a los jueces, magistrados y demás servidores judiciales.</p> <p>5. Creación de una herramienta digital en la que se integren y sistematicen las sentencias de los tribunales administrativos para su consulta pública.</p> <p>En aquellos aspectos en los que se requiera, se escuchará el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en los términos que establezca la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p>Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019.</p> <p>La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello.</p> <p><b>Artículo 84. Comisión de acompañamiento y seguimiento.</b> Con el fin de realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las medidas relacionadas en el artículo anterior, se creará una comisión conformada por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura y dos por el Consejo de Estado, los cuales serán designados en el término de un mes contado desde la publicación de la presente ley.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura rendirá un informe mensual Sala Plena del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de las medidas.</p> <p>Los conceptos y recomendaciones de la comisión sobre el cumplimiento o adopción de medidas deberán ser atendidos por el Consejo Superior de la Judicatura y, en caso de no ser adoptados, se manifestarán las razones, para lo cual se escuchará previamente al Presidente del Consejo de Estado.</p> <p>La comisión se reunirá cada 15 días y funcionará por tres años con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la implementación de la reforma.</p> <p><b>Artículo 85.</b> Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros.</b> En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa.</b> La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.</p>	<p>Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.</p> <p>De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se registrarán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.</p> <p><b>Artículo 87. Derogatoria.</b> Deróganse las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: el inciso 4º del artículo 192; la expresión «Dicho auto es susceptible del recurso de apelación» del artículo 193; el artículo 226; el inciso 2.º del artículo 232; la expresión «, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se decidirán de plano» del inciso 2º del artículo 238; el inciso 2.º del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; y se deroga la expresión «Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia» del inciso 2º del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2011; y el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.</p> <p>En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto de Ley según consta en Acta No. 22 de sesión remota de octubre 14 de 2020, Acta No. 23 de sesión remota de octubre 21 de 2020. Anunciado entre otras fechas, el 13 de octubre de 2020 según consta en Acta No. 21 de sesión remota de la misma fecha y el 14 de octubre de 2020 según consta en Acta No. 22 de sesión remota de la misma fecha.</p> <p style="text-align: center;"> <b>ALEJANDRO A. VEGA PÉREZ</b>                  Coordinador Ponente             </p> <p style="text-align: center;"> <b>CESAR A. LORDUY MALDONADO</b>                  Coordinador Ponente             </p> <p style="text-align: center;"> <b>JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO</b>                  Coordinador Ponente             </p> <p style="text-align: center;"> <b>ALFREDO R. DELUQUE ZULETA</b>                  Presidente             </p> <p style="text-align: center;"> <b>AMPARO Y. CALDERÓN PERDOMO</b>                  Secretaria             </p>